INSTANT *THE NEW YORK TIMES* BESTSELLER

David A. Graham

El Proyecto

Una investigación periodística que disecciona *Project 2025,*
el manual ideológico de Trump para transformar
Estados Unidos y el mundo

Shackleton
books

INSTANT *THE NEW YORK TIMES* BESTSELLER

David A. Graham

El Proyecto

Una investigación periodística que disecciona *Project 2025,*
el manual ideológico de Trump para transformar
Estados Unidos y el mundo

Shackleton
books

EL PROYECTO

EL PROYECTO

Una investigación periodística que disecciona Project 2025, el manual ideológico de Trump para transformar Estados Unidos y el mundo

DAVID A. GRAHAM

Shackleton books

El Proyecto. Una investigación periodística que disecciona Project 2025, el manual ideológico de Trump para transformar Estados Unidos y el mundo.

© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2026

© David A. Graham, 2025.

Traducción: Antonio Vallenilla Nebreda y Anton Nallib

Shackleton books

@Shackletonbooks

www.shackletonbooks.com

Diseño de cubierta y maquetación: Ana Montero

Coordinación editorial: Shackleton Books.

Conversión a ebook: Iglú ebooks

ISBN: 978-84-1361-790-9

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.

Índice

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN I

Los medios y los fines

SECCIÓN II

Capítulo 1. Género, familia y derechos

Capítulo 2. Inmigración y seguridad fronteriza

Capítulo 3. Economía y comercio

Capítulo 4. Medioambiente y energía

Capítulo 5. Política exterior y defensa

Nota sobre las fuentes

Fuentes de las notas a pie de página

Agradecimientos

En memoria de Karen Blumenthal y John F. Burness.

INTRODUCCIÓN

Cuando el presidente Donald Trump abandonó el Despacho Oval en enero de 2021, casi todo el mundo consideraba su Administración un fracaso. Trump no había cumplido las expectativas que él mismo había alimentado —desde la construcción de un muro en la frontera con México hasta la revitalización de la industria manufacturera estadounidense y la transformación de la economía— y, además, había manejado de forma desastrosa la crisis del coronavirus, que devastó el país. Tras perder con claridad las elecciones de noviembre de 2020, Trump presentó una batería de demandas infundadas para intentar invalidar el resultado y retorcer el recuento de votos: maniobras descaradas para mantenerse en el poder que culminaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque el Senado no lo condenó en el juicio político, votantes de todo el espectro ideológico, así como muchos cargos electos del Partido Republicano, lo responsabilizaron del ataque.

Sin embargo, cuando la prensa empezaba a escribir el obituario político de Trump, un pequeño grupo de antiguos miembros de su Administración empezó a defender otra idea: Trump no había fracasado; lo habían saboteado. Ese grupo estaba convencido de que alguien había amañado las elecciones, pese a que no existía prueba alguna que respaldara esa afirmación. Y aunque no necesariamente discrepaban de quienes veían su Gobierno como un fiasco en términos políticos, situaban el problema en otro lugar: el sistema le había fallado. Según esa lectura, cargos designados indolentes, saboteadores republicanos aferrados a los viejos dogmas del partido y burócratas de carrera frenaron un Gobierno prometedor y a un presidente con visión.

Esas voces contrarias creían que solo podían construir la nación cristiana y conservadora que deseaban mediante un asalto meticulosamente organizado al Gobierno de los Estados Unidos tal como ha existido. El próximo presidente republicano tendría que replantearse no solo las políticas y la estrategia, sino también la naturaleza misma del funcionamiento del Estado y —quizá igual de

importante— quién controlaría sus estructuras. Este enfoque no respondía al conservadurismo, sino a una postura deliberadamente radical, basada en la convicción de que ya no quedaba ningún orden constitucional que salvar. Sus partidarios no solo consideraban que la oportunidad llegaría pronto, sino que solo un hombre podía y quería llevarla a cabo: Donald J. Trump.

Durante los cuatro años del mandato de Joe Biden, un grupo de personas —entre las cuales figuran Paul Dans, Russell Vought y Kevin D. Roberts— se dedicó a preparar una segunda Administración Trump que no repetiría los errores de la primera. Si bien algunos de estos colaboradores se integraron también en el equipo de reelección, este grupo de trabajo tenía todo el foco puesto en lo que ocurriría una vez Trump asumiera de nuevo el cargo. Bajo el auspicio de la Heritage Foundation, un think tank conservador con más de cincuenta años de historia, diseñaron un plan articulado en cuatro grandes ejes: una plataforma detallada de políticas, una enorme base de datos de posibles funcionarios, cursos de formación para futuros empleados y un manual de acción.

Project 2025 es la llave maestra para entender la segunda presidencia de Trump, así como el futuro del Partido Republicano y de la derecha estadounidense. No coincide exactamente con la agenda de Trump, mas su planificación minuciosa, en contraste con la improvisación caótica que lo caracteriza, sitúa este manual en posición de dominar la Administración y de aportar el armazón intelectual para las decisiones políticas y de gobierno de los próximos cuatro años y más allá.

Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, escribe que Project 2025 tiene cuatro objetivos: «restaurar la familia como eje central de la vida estadounidense y proteger a nuestros hijos; desmantelar el Estado administrativo y devolver el autogobierno al pueblo estadounidense; defender la soberanía de nuestra nación, sus fronteras y sus recursos frente a las amenazas globales, y garantizar nuestros derechos individuales, otorgados por Dios, para vivir en libertad, lo que nuestra Constitución llama “los beneficios de la libertad”».

Este resumen deja entrever algunos de los planteamientos más extravagantes del texto, especialmente al poner en primer plano las cuestiones familiares y el ataque contra el Estado administrativo, un

término académico que alude al Estado federal burocrático tal como se entiende en Estados Unidos. Pero Roberts también pasa de puntillas por buena parte del radicalismo del plan: Project 2025, en su integridad, es un esquema para expandir de forma masiva el poder presidencial. Sus promotores desean que Trump gobierne por decreto y nombre a discreción a los cargos del poder ejecutivo; que despida a funcionarios cuando le convenga; que abandone la imparcialidad histórica del Departamento de Justicia; que erosione la independencia de agencias como la Comisión Federal de Comunicaciones; y que se apropie, en la práctica, de atribuciones que corresponden al Congreso.[1]

Uno de los dogmas de Project 2025 sostiene que el movimiento progresista, a diferencia de la derecha, actúa de forma muy organizada y disciplinada. Esta perspectiva puede sorprender a cualquiera que haya visto a la izquierda en acción durante la última década, pero sus autores lo afirman convencidos. A veces, los progresistas acusan a los líderes conservadores de ser unos cínicos; sin embargo, los autores de este texto creen a pies juntillas en los supuestos de esta guía.

«La cruda realidad en Estados Unidos es que entramos en las últimas fases de una toma marxista del país: nuestros adversarios ya controlan las armas del aparato gubernamental y las han apuntado contra nosotros», ha dicho Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump y figura clave de Project 2025. «Y las mantendrán apuntándonos hasta que ya no necesiten ganar elecciones». Paul Dans, director de Project 2025 y un cargo medio en la primera Administración Trump, ha advertido de que los estadounidenses estaban «viviendo bajo algo así como un reinado tiránico de Joe Biden» y «en medio de una revolución neomarxista aquí, en Estados Unidos. Tenemos que tomar lo que está pasando».

Esta sombría visión se hace eco de «The Flight 93 Election»,[2] un artículo firmado con seudónimo en 2016 en la Claremont Review of Books que se convirtió en un grito de guerra para los intelectuales de la derecha radical. El título alude al vuelo secuestrado el 11 de septiembre, en el que pasajeros y tripulación se sacrificaron al forzar a los terroristas a estrellar el avión lejos de un posible objetivo en Washington. El autor describía las elecciones de 2016

en términos apocalípticos y sostenía que la derecha —y Estados Unidos, y aún más Occidente en su conjunto— requería una acción drástica, incluso de autoinmolación.

«2016 es la elección Vuelo 93: o asaltas la cabina o mueres. Puede que mueras de todos modos. Quizá tú, o el líder de tu partido, logres entrar en la cabina y no sepas pilotar o aterrizar el avión», advertía el ensayo. «No hay garantías. Salvo una: si no lo intentas, la muerte es segura». Y llevaba la metáfora aún más lejos: una presidencia de Hillary Clinton equivale a jugar a la ruleta rusa con una pistola semiautomática. Con Trump, al menos, puedes girar el tambor y tener alguna oportunidad.

Más tarde salió a la luz la identidad del autor: Michael Anton, que luego se incorporó al Consejo de Seguridad Nacional de Trump. Después colaboró con Project 2025, que adoptó su tono y visión. El Proyecto se asienta en una idea central: la única manera de revertir la peligrosa politización del poder ejecutivo consiste en politizarlo todavía más. Para ello recupera una máxima que circuló durante la guerra de Vietnam: «Tenemos que destruir la aldea para salvarla». Esta visión nihilista ha ido ganando terreno entre un electorado que, según los sondeos, cree que el sistema estadounidense está tan podrido que habría que terminar con él tal y como existe.

Si el diagnóstico de Project 2025 resulta dramático, sus ambiciones lo superan. «Será un momento tipo JFK. Un verdadero renacimiento de la forma de gobernanza», llegó a afirmar Dans. Russell Vought declaró que 2024 «rivalizaría con 1776 y 1860 en su importancia para la nación». Con mayor contundencia se expresó Kevin D. Roberts, quien formuló lo que está en juego y lo que piensa hacer con cualquiera que intente interponerse en una entrevista de julio de 2024: «Nos hallamos en pleno proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite».

Esta retórica —y el nombre con aire de un plan urdido por un villano de James Bond— ayuda a explicar por qué Project 2025 ha atraído mucha más atención que otros manuales similares que los think tanks partidistas elaboran cada cuatro años antes de las elecciones. El documento principal de Project 2025, Mandate for Leadership, ofrece una lectura desorientadora y opaca, plagada de descripciones asépticas de siglas y oficinas del poder ejecutivo que

conviven con extravagantes propuestas políticas, a menudo en la misma página. Los políticos suelen acusar a sus rivales de urdir planes siniestros que ocultan a sus votantes. Sin embargo, en este caso la Heritage Foundation recopiló esas ideas y las publicó en un PDF en línea para que cualquiera pudiera leerlas un año y medio antes de las elecciones.

Muchos críticos alzaron la voz contra Project 2025 cuando la Heritage Foundation publicó Mandate for Leadership en 2023, pero el grueso de la población no oyó hablar del documento hasta el verano de 2024. El 30 de junio, durante los premios BET, la actriz Taraji P. Henson animó al público a familiarizarse con el título del manual: «El plan de Project 2025 no es ningún juego. Buscadlo», afirmó. Muchísima gente lo hizo; los motores de búsqueda registraron una avalancha de consultas. Durante la Convención Nacional del Partido Demócrata en agosto, varios portavoces incluso blandieron una reproducción gigante del libro para canalizar la atención de los votantes hacia Project 2025.

Trump montó en cólera. En el debate de septiembre con Kamala Harris, quien lo acusó de querer aplicar dicho plan, soltó: «No sé nada de Project 2025. Eso circula por ahí; no lo he leído. Ni quiero hacerlo. No pienso leerlo». Es posible que dijera la verdad. Aunque Dans ansiaba que «uno de los pares de ojos que leyeran estos pasajes fuera el del 47.º presidente de los Estados Unidos de América», Trump rara vez lee. Se presentó como ajeno al proyecto y tachó algunas de sus ideas de «absolutamente ridículas y abismales».

Sus desmentidos rozaban el absurdo. Aunque Project 2025 no formara parte oficialmente de la campaña de Trump, el plan estaba fuertemente integrado en el universo trumpista. Tres cuartas partes de los autores y colaboradores del manual trabajaron en su primera presidencia; cuatro de ellos —Vought, Ben Carson, Chris Miller y John Ratcliffe—[3] ocuparon puestos en su Gobierno. Decenas de colaboradores adicionales también tuvieron algún cargo bajo la primera Administración Trump. Ya como candidato, este nombró a Vought director de su plataforma política en la Convención Nacional Republicana de 2024. J.D. Vance escribió el prólogo de un libro de Roberts, pero los editores aplazaron su publicación cuando

Project 2025 desató una oleada de polémica y mala prensa.

«El presidente Trump está muy implicado en el Proyecto», aseguró Dans en 2023. Al año siguiente, en una entrevista con la Australian Broadcasting Corporation, añadió: «Nos coordinamos con la gente de su campaña. La realidad es que… a menudo les aportamos ideas». Y, al describir el rol de Project 2025, remató: «Esto va a ser la sala de máquinas de la próxima Administración; mucha de la gente que sirvió al Gobierno volverá a hacerlo».

Trump tenía motivos pragmáticos para marcar distancias: numerosas propuestas del documento resultaban enormemente impopulares y complicaban su estrategia de esquivar asuntos inflamables. Su campaña tan solo publicó un programa de veinte puntos con planteamientos generales y evitó las decisiones más controvertidas. A lo largo de casi mil páginas, Mandate for Leadership entra de lleno en esos campos de minas.

Cuando la Heritage Foundation encargó una encuesta entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2024, descubrió que casi dos tercios de los votantes habían oído hablar de Project 2025 y que solo un 14% respaldaba lo que representaba. En los estados bisagra, que suelen decidir las elecciones, la proporción de votantes que conocían la hoja de ruta conservadora y la rechazaban era todavía mayor. En medio del revuelo, Dans dejó su puesto en la Heritage Foundation a finales de julio de 2024, pero para entonces ya había abandonado el trabajo del Proyecto bien atado.

Mientras Trump trabajaba por conseguir su segundo mandato, escuchó muchas voces, algunas de ellas procedentes de entornos distintos y con posiciones que no siempre coincidían con las de los autores de Project 2025. Sin embargo, en cuanto ganó la reelección, abandonó cualquier gesto de distanciamiento del equipo que lo había creado. En su primera ronda de nombramientos para altos cargos incluyó a varios de sus integrantes, entre ellos Tom Homan (zar de la frontera), John Ratcliffe (director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés), Brendan Carr (presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC), Paul Atkins (presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC), Peter Navarro (consejero sénior para Comercio y Manufactura), Michael Anton (director de Planificación de Políticas en el Departamento de

Estado), Pete Hoekstra (embajador en Canadá) y Russell Vought (director de la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB).

Aun así, Project 2025 no depende de que sus impulsores ocupen puestos especialmente visibles para funcionar. El plan aspira, en teoría, a construir sistemas y a reclutar y afianzar al mayor número posible de afines para tomar el control del funcionamiento del poder ejecutivo. En un análisis, Bloomberg Government concluyó que más de 30 de las 47 primeras acciones ejecutivas de Trump coincidían o encajaban parcialmente con recomendaciones del proyecto.

En la primera sección del libro, exploraré los aspectos más radicales de Project 2025: cómo pretende reinventar no solo lo que puede hacer un Gobierno, sino también la manera de hacerlo. Mostraré cómo sus autores buscan politizar el poder ejecutivo: colocando ideólogos incluso en puestos estrictamente burocráticos, desmantelando el funcionariado civil y arrebatando poder al Congreso. Para ello, trazaré un recorrido que muestra cómo planean convertir en armas algunas de las piezas más opacas y decisivas del ejecutivo, como la Oficina de Administración y Presupuesto, la Oficina de Personal Presidencial y el Departamento de Justicia.

En la segunda sección del libro, indagaré en las políticas radicales que los autores de Project 2025 proponen aplicar una vez consoliden esos nuevos poderes. Explicaré los cambios más notables y de mayor calado que desean introducir en cuestiones de género, familia y derechos civiles; en política económica y comercio; en medio ambiente; y en política exterior y defensa.

Roberts escribe en el prólogo de Mandate for Leadership: «Los conservadores solo tienen dos años y una sola oportunidad para hacer las cosas bien». Están decididos a no dejar escapar esa oportunidad.

SECCIÓN I

Los medios y los fines

Cuando el público oyó hablar por primera vez de Project 2025, casi toda la atención se centró en las propuestas políticas concretas que exponía: planes capaces de trastocar muchos aspectos de la vida en Estados Unidos, desde derechos fundamentales hasta la estructura de la economía. Se trataba de propuestas radicales y de gran alcance que merecían un examen minucioso, pero, sin la capacidad de llevarlas a la práctica, no eran más que píxeles en una pantalla. Lo que distingue a Project 2025 de tantas otras promesas de campaña, lo que nos obliga a tomarnos ese documento en serio y a entenderlo, es su detallado plan de ejecución.

La idea de crear un manual político e ideológico para una presidencia futura no era algo novedoso. A medida que el Gobierno federal creció y se volvió más complejo, las administraciones de ambos partidos —el Demócrata y el Republicano— empezaron a recurrir a organizaciones externas para que les diseñaran marcos de gobierno. El objetivo era que, cuando el presidente jurara el cargo el 20 de enero, pudiera dedicar los primeros cien días a impulsar medidas, en vez de malgastarlos en reclutar personal y fijar prioridades.

El prototipo de este tipo de iniciativas surgió en vísperas de la llegada de Ronald Reagan. La Heritage Foundation, creada en 1973 para aunar el neoliberalismo económico (promercado y partidario de un Estado limitado) con el conservadurismo cultural, publicó en 1980 el primer Mandate for Leadership para orientar a la nueva Administración. Dirigido a quienes trabajarían para el próximo presidente republicano, el texto proponía que el Partido Republicano dejara atrás la moderación de la posguerra y abrazara un programa más conservador. Y funcionó: los asesores de Reagan, el presidente electo, lo recibieron como una hoja de ruta y, años después, The New York Times lo describió como «el manifiesto de la revolución Reagan». Según estimaciones difundidas por la Heritage, el Gobierno aprobó e implementó en su primer año alrededor del 60% de las recomendaciones.

Heritage siguió elaborando agendas de política pública y, aunque ninguna alcanzó el impacto de la primera, otras organizaciones tomaron nota. En septiembre de 2000, el think tank neoconservador Project for a New American Century publicó «Rebuilding America's Defenses». Tras los atentados del 11 de septiembre, un año después, las ideas del documento y varios de sus firmantes pasaron a ocupar un lugar central en la «guerra global contra el terrorismo» de la Administración George W. Bush. Cuando Barack Obama ganó las elecciones, en 2008, todavía era un recién llegado a Washington, y el Center for American Progress aportó personal e ideas para su Gobierno. «Desde que la Heritage Foundation ayudó a orientar la transición de Ronald Reagan en 1981, ningún grupo externo había ejercido tanta influencia», informó Time.

Mientras tanto, la Heritage había perdido brillo. En 2012, Jim DeMint, figura emblemática del Tea Party, renunció a su escaño en el Senado para ponerse al frente de la fundación, pero el movimiento del Tea Party[4] y el protagonismo de DeMint se desinflaron en pocos años. La sucesora de DeMint, Kay Coles James, chocó con aliados de Trump y, en octubre de 2021, la fundación nombró presidente a Kevin Roberts. A los pocos meses, Roberts dio los primeros pasos de lo que acabaría convirtiéndose en Project 2025 y fichó a Paul Dans —que había trabajado en la Oficina de Personal Presidencial en la Casa Blanca de Trump— para dirigirlo. Los trabajos arrancaron a comienzos de 2022.

Para que Project 2025 trascendiera más allá de la Heritage, Roberts ordenó a Dans que buscara fuera y reuniera a un abanico amplio de colaboradores de todo el arco de la derecha, hasta convertir a la Heritage en la coordinadora del movimiento Make America Great Again. Cientos de figuras procedentes de grupos conservadores contribuyeron al resultado final y reflejaron el espectro multifacético del trumpismo.

La fundación conservadora vio en Project 2025 una vía para recuperar la prominencia de la que gozó en la era Reagan. El documento matriz, de 922 páginas, que reúne el conjunto de propuestas y constituye el núcleo del proyecto, comparte el nombre de su antecesor. «El libro puso literalmente al movimiento conservador y a Reagan en la misma página, y la revolución que

siguió nunca habría sido posible sin ese grupo de activistas comprometidos», escribió Dans.

No obstante, Project 2025 se apartó de su predecesor en aspectos esenciales, y no solo porque su visión política difiriera de la de Reagan. La gran novedad consistió en levantar un «Gobierno en la sombra» listo para incorporarse al poder ejecutivo desde el primer día de la nueva Administración. Tradicionalmente, ese trabajo lo asumen las propias campañas y los equipos de transición presidenciales; sin embargo, Project 2025 se puso en marcha incluso antes de que el Partido Republicano nominara a su candidato, con el objetivo de llegar preparado al 20 de enero de 2025.

«Necesitamos una visión global, y Donald Trump la expone, pero también necesitamos una especie de manual de instrucciones: cómo hacer las cosas», explicó Dans a Steve Bannon en 2024. Eso obligaba al proyecto no solo a presentar propuestas detalladas, sino también a identificar y formar a las personas que, en teoría, debían convertirlas en medidas aplicables. La cuarta parte de Project 2025, un manual para los primeros seis meses de la administración, no llegó a publicarse, pero Vought dejó entrever su contenido en un discurso de 2024: «Tenemos planes detallados para las agencias», dijo. «Estamos redactando las órdenes ejecutivas. Estamos redactando las regulaciones y estamos reuniendo las facultades legales necesarias para hacer posible todo lo que el presidente Trump ha prometido».

Los hombres tras el telón

Las dos figuras más relevantes para entender Project 2025 son Paul Dans, que dirigió el proyecto, y Russell Vought, que figura como autor, pero a quien muchos consideran su motor intelectual. Ambos comparten dos convicciones: la primera, siguiendo un lema de la era Reagan, que el personal es política; la segunda, que los entresijos del Gobierno suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, llegaron a esas conclusiones por caminos muy distintos.

Dans exhibe el currículum más típicamente elitista, si bien en esta pareja hace de outsider. Tiene la constitución recia del jugador de lacrosse que fue, y se mueve con una torpeza algo a la defensiva: se acerca a la afabilidad, sin acabar de alcanzarla. En las entrevistas habla con una nostalgia brumosa de un pasado estadounidense más feliz. Según su propio relato, encarna al votante clásico de MAGA: el hijo desencantado de una familia católica liberal que abrió los ojos ante los errores del Partido Demócrata y se escoró a la derecha. «Vengo de una deplorable[5] mezcla de purasangre», dijo Dans en 2023 en un pódcast de American Moment, un grupo alineado con Project 2025. Contó que el idealismo de la era Kennedy atrajo a sus padres a Washington y que allí se conocieron. Creció en el área de Washington D. C. y luego se matriculó en el MIT, donde estudió Economía y obtuvo un máster en Planificación Urbana. Después cursó Derecho en la Universidad de Virginia (UVA), donde se vinculó a la Federalist Society, el grupo jurídico conservador. No era un momento propicio para escorarse a la derecha, ni siquiera en un lugar como la UVA, y la Federalist Society todavía no era el coloso que acabaría dominando el Tribunal Supremo en la era Trump. «Podríamos decir que los conservadores nos hallábamos en pleno invierno», recordó en la entrevista con American Moment. «Clinton acababa de llegar al poder. Fue nuestra travesía del desierto».

Así que, cuando Dans se graduó, decidió no incorporarse al Gobierno y trabajar para bufetes de élite en la ciudad de Nueva York. Su papel más destacado llegó en el marco de una batalla épica entre Chevron y el abogado activista Steven Donziger, que había demandado a la petrolera por daños ambientales en Ecuador. Dans formó parte del equipo que consiguió imágenes comprometedoras de Donziger, grabadas para un documental, y que a la postre desembocaron en su expulsión del colegio de abogados.

Dans mantuvo el interés por la política. Se dejó seducir por la fantasía «birther», según la cual Barack Obama no había nacido en Estados Unidos: «Me planteé algunas dudas académicas serias sobre el lugar de nacimiento de un expresidente», dijo con media sonrisa a los presentadores de American Moment. Y cuando Trump se convirtió en el defensor más visible de esa teoría, Dans comenzó a seguirlo. Lamentó que Trump sopesara presentarse en 2012 y al

final renunciara, y no dudó en apoyar desde muy temprano su campaña de 2016.

Tras la inesperada victoria de Trump, Dans esperaba que su currículum de élite y su apoyo inquebrantable al futuro presidente lo situarán en la pole position de la carrera hacia la Administración. Sin embargo, se quedó fuera y llegó a la conclusión de que el problema era precisamente ese: que él era demasiado MAGA. «Creo que la primera pregunta [en la solicitud de empleo] era: "¿Ha trabajado antes en el Gobierno?"», recordó. «Y eso equivale a preguntar: "Bueno, ¿[para] quién?". Con una operación matemática [se sabe que alguien era, por ejemplo,] un designado [heredado] de Bush».

Dans por fin tuvo una oportunidad en 2018, cuando conoció a James Bacon, un universitario que trabajaba en la Administración. Para alguien con la carrera ya encaminada, pedir ayuda a un chaval mucho más joven debió de obligarlo a tragarse el orgullo, pero la jugada se saldó con un puesto en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), donde trabajó en políticas para personas sin hogar. En el HUD, Dans desarrolló un sano escepticismo hacia los funcionarios de carrera, pero reservó un desdén aún mayor para los cargos políticos, a los que veía poco comprometidos con la causa.

«Nuestra gente llegó al poder y, en muchos casos, no tenía ni idea de nada y eran holgazanes», dijo a los presentadores del pódcast de American Moment. «Desde luego, existe obstrucción [por parte de algunos funcionarios de carrera], pero creo que el problema es más bien que los cargos políticos se dejan dominar, y eso ocurre por no querer hacer el trabajo duro».

En 2020, a Dans le surgió la ocasión de hacer algo al respecto. Le ofrecieron un puesto en la Casa Blanca, en la Oficina de Personal Presidencial (PPO). Según cuenta, ni siquiera sabía que existía y se alegró, sobre todo, de que no lo enviaran a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), que a su juicio era aburrida. El cargo le quedaba como un guante. La PPO, se encarga de buscar, evaluar y contratar a unos cuatro mil cargos de designación política en cada administración, entre los cuales, más de mil puestos que requieren confirmación del Senado.

Cuando Dans llegó, el director de la PPO era John McEntee. Antiguo quarterback de la Universidad de Connecticut, McEntee empezó como el body man del presidente Trump: un asistente que lo acompaña a todas partes y se ocupa de sus necesidades cotidianas. En 2018, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, lo despidió por sus líos con las apuestas; pero, cuando Kelly también cayó, Trump recuperó a McEntee para ponerlo al frente de la PPO. Con solo veintinueve años y un carácter áspero en un puesto que suelen ocupar veteranos discretos, su credencial más evidente era la devoción a Trump. Y en Dans, McEntee encontró un colaborador fervoroso.

Aunque Dans criticaba a los designados no elegidos por acumular demasiado poder, él se llevó por delante a Dale Cabaniss, la directora de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), un cargo que exige confirmación del Senado y que funciona, más o menos, como el Departamento de Recursos Humanos del funcionariado federal. Cabaniss dimitió harta, según informó Politico, y poco después Dans ascendió a jefe de gabinete de la PPO. Ahora bien, su paso por allí duró poco: la derrota de Trump en noviembre de 2020 lo cortó en seco. Con grandilocuencia, Dans se comparó con Cincinato, el político romano que renunció al poder para volver a su granja, y decidió regresar a casa y retomar el arado. Cuando Roberts le pidió que dirigiera Project 2025, estaba preparado.

Russell Vought, en cambio, es un consumado conocedor de los entresijos de Washington: se abrió paso en el Partido Republicano de manera metódica, como cabría esperar de un tecnócrata de los presupuestos. Vought creció en Connecticut, en lo que él mismo ha descrito como una familia obrera y profundamente cristiana. Estudió en Wheaton College, una universidad cristiana conservadora de artes liberales en Illinois, cuyo exalumno más famoso es Billy Graham. Más tarde cursó Derecho en la Universidad George Washington.

Vought dio sus primeros pasos en política como asesor del senador Phil Gramm, de Texas, el abanderado del conservadurismo fiscal en Washington a finales de la década de los 80 y durante la de los 90. Después trabajó para el congresista Jeb Hensarling —otro excolaborador de Gramm—, que llegó a presidir el Comité de

Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y más tarde para el Comité de Estudios Republicanos, el bloque de congresistas más marcadamente conservador. Con el tiempo, trabajó para el congresista Mike Pence —también conservador fiscal y cristiano evangélico— y en la Heritage Foundation.

Con su cabeza rapada, la barba bien recortada y unas gafas de montura gruesa, Vought proyecta una apariencia afable que choca con su visión radical del mundo. El cristianismo ocupa el centro de su vida y de su carrera, y moldea su enfoque incluso cuando habla de presupuestos. En la audiencia de confirmación de 2017 para el puesto de subdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), el senador Bernie Sanders, de Vermont, lo interrogó por un texto de 2016 en el que Vought escribió: «Los musulmanes no solo tienen una teología deficiente. No conocen a Dios porque han rechazado a Jesucristo, su Hijo, y están condenados». Sanders recibió una andanada de críticas por someterlo, según dijeron, a una «prueba religiosa», y Vought acabó logrando la confirmación en el Senado por un solo voto (50-49).

Aunque las preguntas de Sanders puedan parecer improcedentes, las ideas religiosas de Vought resultan esenciales para entender su política. Vought invoca la tradición de la separación entre Iglesia y Estado, pero sostiene que el cristianismo debe seguir ejerciendo una influencia decisiva sobre la forma de gobernar Estados Unidos. En un pódcast de 2023 presentado por el congresista republicano Tim Burchett (Tennessee), Vought describió así la misión del Center for Renewing America, el grupo que fundó tras dejar la Casa Blanca: «La prioridad número uno de nuestra organización es recuperar una idea fundamental en este país, un consenso: que no somos un país secular, sino una nación cristiana tal y como fue fundada. Esto debería compartirlo todo el mundo, incluso quienes disfrutan de libertad religiosa para profesar otra fe».

Y aunque algunos conservadores religiosos han rechazado la etiqueta de «nacionalistas cristianos» o han alegado que el término no significa gran cosa, Vought no ha seguido ese camino. En febrero de 2024 le dijo a Charlie Kirk,[6] el líder de Turning Point USA: «A diferencia de la mayoría de los términos peyorativos, describe algo que es cierto. Somos cristianos que somos nacionalistas…». Esa

mezcla de cristianismo devoto y estricto conservadurismo fiscal habría encajado a la perfección en una Administración encabezada por Ted Cruz, Mike Huckabee o Rick Santorum, o por su antiguo jefe, Mike Pence. Pero ninguno de ellos ganó en 2016, y Vought no cuadraba, de entrada, con Donald Trump: un mujeriego, poco religioso, que se presentó prometiendo dinamitar ciertas ortodoxias conservadoras sobre el gasto y, al mismo tiempo, proteger programas como Social Security y Medicare.

Aun así, Vought se hizo un hueco en la Casa Blanca de Trump: primero como subdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), cargo para el que el Senado lo confirmó el 28 de febrero de 2018 por un solo voto (50-49, con desempate de Pence); después como director interino a partir de enero de 2019; y, por último, como director tras la confirmación del Senado en julio de 2020.

Vought pasó buena parte de su carrera en el Capitolio, donde la mayoría de los empleados cobran poco, pero se dejan la piel. Y, como Dans, tampoco se llevó una gran impresión del nivel ni de la ética laboral del personal del poder ejecutivo. «Tuve un asiento en primera fila para muchos de estos asuntos y, más importante aún, vi cómo el mal criterio acababa frustrando lo que intentábamos lograr, en parte por nombramientos políticos poco enérgicos que se negaban a reclamar la superioridad moral, especialmente durante los dos primeros años de la administración», dijo Vought en un discurso de 2023.

Con el objetivo de encajar en la Administración Trump, Vought se vio obligado a aparcar buena parte del conservadurismo fiscal que llevaba años defendiendo. Durante la campaña de 2016, Trump prometió reducir la deuda nacional, mas esta siguió creciendo a lo largo de su mandato y el déficit se disparó en 2020, cuando el Gobierno aprobó paquetes masivos de estímulo por la COVID-19. A eso se sumaron los efectos de los grandes recortes fiscales de 2017 sobre la recaudación y el saldo presupuestario. Un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) publicado en octubre de 2024 calculó que, si Trump aplicaba sus planes para un segundo mandato, añadiría en torno a 7,75 billones de dólares de deuda hasta 2035.

Este tipo de derroche llevó a algunos antiguos colegas a acusar a Vought de mantener un «matrimonio de conveniencia» con Trump para alcanzar sus objetivos ideológicos, según informó The Washington Post. Sin embargo, quizá Vought simplemente reordenó sus prioridades. Muchas personas que trabajaron en la primera Administración Trump venían de tradiciones ideológicas ajenas al presidente; quienes no se marcharon a la greña acabaron, a menudo, como conversos entusiastas. El resentimiento vertebra la carrera de Trump, y la sensación de persecución encaja bien con cristianos conservadores como Vought, que se sienten extraños en la cultura dominante y se identifican con una Iglesia primitiva, hoy perseguida.

Vought, de hecho, se ha convertido en defensor de algunas de las ideas más estrambóticas de Trump. «Creo que robaron las elecciones [de 2020]», dijo en una entrevista de 2022. Y ha cargado incluso contra la Fedelarist Society —que muchos liberales y centristas ven como la gran cantera del derecho conservador— por vivir, según él, de espaldas a la realidad: «La Federalist Society no sabe ni qué hora es», declaró. En concreto, reprochó al grupo que no captara, a su juicio, las amenazas existenciales que enfrenta el país.

«Nos encontramos en un momento posconstitucional en nuestro país. Nuestras instituciones, nuestros entendimientos y nuestras prácticas constitucionales se han ido transformando, a lo largo de décadas, y han pasado de las palabras escritas en el papel a un nuevo arreglo —un nuevo régimen, si se quiere— que solo rinde homenaje de boquilla a la antigua Constitución», escribió Vought en un ensayo de 2022. Dos años después, tras la condena de Trump por treinta y cuatro delitos graves en Nueva York el 30 de mayo de 2024, Vought fue aún más tajante: «No me digan que vivimos bajo la Constitución», publicó en X. La conclusión resulta inquietante, pero para Vought y sus aliados funciona como punto de partida: si el país ya vive «más allá» de la Constitución, ellos también se sienten con margen para imponer su propio modelo de gobierno.

La usurpación del Poder Ejecutivo

Los autores de Project 2025 procuran presentar su crítica como una defensa de la Constitución. En primer lugar, sostienen que el Congreso ha cedido su poder en favor del Ejecutivo. «La situación general es constitucionalmente grave, insosteniblemente costosa y necesita una reparación urgente. Está en juego nada menos que la supervivencia del autogobierno en Estados Unidos», escribe Vought.

Muchos académicos, expertos y políticos de sensibilidades muy distintas coinciden en que el Congreso se ha vuelto demasiado remiso a ejercer como contrapeso del poder ejecutivo. Durante el último medio siglo, ha tolerado que los presidentes emprendan guerras en el extranjero de facto, y también ha normalizado su propia parálisis presupuestaria: en lugar de aprobar a tiempo las cuentas, recurre a prórrogas provisionales y se asoma, una y otra vez, al abismo del cierre administrativo[7]. Así no se puede gobernar.

En segundo lugar —y aquí llega lo más controvertido—, los autores de Project 2025 denuncian que los burócratas de carrera se han erigido en un «cuarto poder» no elegido. Dan por hecho que una función pública estable, gobierne quien gobierne, tiende a resistirse al cambio. Y, además, tienen un problema específico con las administraciones conservadoras: los empleados federales se inclinan mayoritariamente hacia el Partido Demócrata.

La solución que propone Project 2025, sin embargo, tiene algo de paradoja: para corregir ese desequilibrio, sus autores quieren concentrar todavía más poder en la Presidencia. Vought reclama «un uso agresivo de los amplios poderes del Ejecutivo» para «devolver» el poder al pueblo estadounidense, incluso el que hoy ejerce el propio Ejecutivo. En la práctica, eso empuja a una centralización extrema en una sola figura, elegida de manera indirecta y que ni siquiera necesita ganar el voto popular para gobernar.

En otras palabras, el plan busca sortear los contrapesos y equilibrios (checks and balances) que articulan la Constitución. Vought lo expresó sin rodeos: «Estamos intentando identificar los focos de independencia y apoderarnos de ellos». Con este fin, el manual plantea convertir dos de las oficinas más técnicas y, en teoría, más

neutrales del Gobierno federal —la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y el Departamento de Justicia— en herramientas partidistas.

Oficina de Administración y Presupuesto

Washington no es una ciudad especialmente glamurosa. Tampoco el Gobierno busca vendernos una imagen épica. Aun así, muchos consideran que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) resulta soporífera. Su función más visible consiste en elaborar el presupuesto que el presidente envía cada año al Congreso, pero también supervisa una parte importante del día a día del Ejecutivo. No es que la OMB sea un organismo secundario: por su dirección han pasado algunos de los operadores más respetados, conectados y talentosos de la política en la capital, de ambos partidos. Sin embargo, rara vez se convierte en el centro de las batallas partidistas. Históricamente, su director suele asomarse en los medios cuando algo se tuerce de forma estrepitosa en la Casa Blanca o en la economía estadounidense en general. Podemos pensar en el caso del director de la OMB de Obama, Peter Orszag, convertido —de manera insólita— en un inesperado sex symbol de la Gran Recesión de 2008.

Precisamente por eso, la OMB figura entre los principales objetivos del plan de Project 2025 para reformar el Gobierno federal. Aunque la OMB actúe como el «control del tráfico aéreo» del presidente, en opinión de Vought, muchas otras partes del Gobierno la ningunean o, peor aún, la ignoran, como si se limitara a llevar la contabilidad. A su juicio, ese desprecio nace de un error de diagnóstico.

«Cuando las políticas se separan de los recursos necesarios para aplicarlas, nacen muertas: se quedan en meras teorías académicas que socavan nuestra seguridad nacional y dejan a departamentos y agencias a la deriva», escribe. El asunto, subraya, no se reduce a «quién tiene el dinero». Quienes minimizan la Oficina de Administración y Presupuesto pasan por alto el papel que Vought le atribuye: empujar las políticas a pesar de la resistencia de

funcionarios de carrera que se muestran perezosos o actúan como adversarios ideológicos. La OMB, sostiene, «es la única Oficina que dispone de herramientas legales lo bastante poderosas como para doblegar las burocracias de las agencias ejecutivas». Con demasiada frecuencia, añade, la OMB sirve de autopista para que algunos empleados de las agencias —o políticos en busca de carrera— filtren sus propios intereses hacia la Casa Blanca, cuando debería operar justo al revés: como conducto para trasladar las prioridades de Presidencia a las agencias.

Vought quiere, además, añadir un arma nueva al arsenal de la OMB. La retención de fondos no suena especialmente amenazante, pero puede tener un impacto enorme. Vought no lo discute abiertamente en Mandate for Leadership, pero Trump prometió utilizarlo en su campaña, y Vought se ha mostrado a favor en otros lugares. La Constitución otorga al Congreso la facultad de gastar y recaudar fondos, pero históricamente las administraciones han buscado adquirir el poder de retenerlos, bien sea para rechazar o posponer su gasto. Legisladores y presidentes se enfrentaron por esta práctica hasta 1974, cuando el Congreso, molesto con Richard Nixon, aprobó la Ley de Control de Incautaciones y Presupuesto del Congreso, que estipula que la rama ejecutiva solo puede retener fondos con la aprobación del Congreso.

Hasta hace poco, la ley se mostró poco controversial. Los presidentes han pedido pocas veces que el Congreso retenga fondos, y el Congreso no ha concedido una solicitud desde el año 2000. En 2019, Donald Trump intentó retener fondos que el Congreso había destinado para Ucrania como parte de su trama para que el presidente de ese país abriese una investigación sobre Hunter Biden[8]. La Cámara de Representantes respondió sometiendo a Trump a un juicio político, aunque no fue condenado en el Senado.

Vought y otros analistas políticos de derechas desean eliminar la Ley de Control de Incautaciones. En una carta al Congreso que se hizo pública en el último trecho de la primera Administración de Trump, oficiales de la OMB escribieron que «la ley es inviable en la práctica y debería ser reformada a fondo o derogada». El Centro para la Renovación de América la ha tildado de «inconstitucional». Trump ha prometido cabildear en el Congreso para derogar la ley, si

bien ha dicho que «tomará acción para desafiar la constitucionalidad de los límites impuestos al poder de la retención de fondos». En palabras sencillas, quiere decir que prevé violar la ley y esperar que la Corte Suprema sentencie a su favor.

El uso de las incautaciones por anteriores presidentes puede haber sido limitado, pero un uso agresivo podría reducir el control del Congreso, ya que resulta fútil apropiarse de fondos si no se puede asegurar que el Gobierno los gaste. En la realidad alternativa de MAGA, este medio es un freno en la legislatura, pero lo cierto es que es una manera de que el presidente anule el poder de gastar fondos del Congreso. La Casa Blanca comenzó sus primeros intentos de incautar fondos en la primera semana de la Administración de Trump.

Vought no se detuviera ahí. Sostiene que muchos directores anteriores se han obsesionado con la parte «presupuestaria» de la OMB y han descuidado la parte «administrativa». En el fondo, eso equivale a gestionar quién trabaja en el Gobierno.

Project 2025 fija tres grandes objetivos en materia de personal para el Gobierno federal. En primer lugar, propone reclutar a un número mayor de designados políticos con un compromiso ideológico más sólido con el proyecto MAGA y prepararlos mejor para el trabajo gubernamental. En segundo lugar, plantea convertir más puestos en la administración en nombramientos políticos —cuyos titulares abandonan el cargo al final de cada administración— en lugar de mantenerlos como funcionarios de carrera. En tercer lugar, recomienda intimidar a los funcionarios actuales para que se plieguen a las nuevas normas. No es una manera de hablar. Vought ha dicho en más de una ocasión: «Queremos traumatizarlos».

Dans y Vought salieron de la primera Administración Trump profundamente frustrados con la calidad de muchos designados políticos. En opinión de ambos, Trump se había buscado el problema. Al llegar a la Casa Blanca, no dio prioridad a una estrategia cuidadosa de selección de personal. Los candidatos presidenciales suelen encargar a un colaborador de confianza —con experiencia— que empiece a preparar la transición con mucha antelación a las elecciones. Trump no esperaba ganar y tampoco entendía hasta qué punto esa tarea resultaba decisiva. Su Oficina de

Personal Presidencial tenía pocos recursos y dependía de asistentes muy jóvenes, sin la experiencia necesaria para moverse por el entramado gubernamental.

Incluso sin esos errores, Trump se topó con obstáculos para fichar a sus elegidos. Muchas personas con experiencia en administraciones anteriores o en otros cargos públicos declinaron trabajar para él: por discrepancias ideológicas, por su temperamento o por miedo al coste reputacional. Eso lo dejó con un equipo en el que unos no tenían credenciales suficientes para el puesto y otros miraban con escepticismo su proyecto político, aunque aun así aceptaran servir por la nación o por interés propio.

«Con la PPO del primer mandato, la Administración Trump nombró menos cargos políticos en sus primeros meses que cualquier otra presidencia reciente», escriben Donald Devine, Dennis Dean Kirk y Dans. Añaden que, en parte, algunos altos cargos veían las vacantes como una forma de recortar gastos. «Esto tuvo como consecuencia obstaculizar de forma permanente la implementación de la agenda del nuevo presidente».

Ante esta situación, los autores de Project 2025 no se conformaban con volver a las prácticas de contratación más intensivas y profesionales de administraciones anteriores. Si lo habitual era que una campaña presidencial y el equipo de transición se encarguen de preparar y reclutar personal, el equipo de Project 2025 quiso hacer ese trabajo por su cuenta, incluso antes de que el Partido Republicano eligiera candidato. Los organizadores se adelantaron para reclutar a activistas de la causa de cara a un eventual regreso de Trump a la Casa Blanca.

En el verano de 2024, Dans dijo a la Australian Broadcasting Corporation que la Heritage Foundation ya tenía una base de datos con diez mil nombres de posibles candidatos. «Queremos gente a la que hayan intentado apartar, pero que, en sentido figurado, haya sangrado por el movimiento. Son madres que han plantado cara a los consejos escolares. Son personas que se han levantado en sus empresas y han dicho: “Basta ya del DEI y del wokismo”».

Dans, que dio un salto repentino al Gobierno, sabe que ese personal necesita formación sobre el funcionamiento del sector público. Por

eso Project 2025 también produjo treinta cursos en vídeo, publicados en línea, de entre treinta y noventa minutos, además de organizar algunas sesiones presenciales. Los participantes podían obtener certificados en materias como «Gobernanza conservadora 101» y «El Estado administrativo y el proceso regulador».

Para los autores de Project 2025 no basta con mejorar la calidad de los designados políticos. Quieren muchos más y, a la vez, muchos menos funcionarios de carrera. A eso apunta la promesa de Roberts cuando habla de «desmantelar el Estado administrativo». Hace casi ciento cincuenta años, el Congreso abolió el sistema de clientelismo que repartía puestos en la administración como favores para los partidarios. En su lugar instauró la función pública moderna, con empleados de carrera que permanecen en sus puestos gobierne quien gobierne. Aun así, algunos puestos de alta responsabilidad se siguen cubriendo con cargos de confianza.

Desde entonces, el Gobierno federal ha crecido enormemente. Hoy emplea a unos dos millones de personas y recurre, además, a decenas de millones de contratistas. Muchos conservadores consideran que ese tamaño resulta excesivo. Sin embargo, no toda expansión les parece mala. En su capítulo del «documento matriz», Vought propone aumentar la plantilla de la OMB.

La gente se queja de la burocracia desde que existe la palabra, pero Trump llevó esa retórica a otro nivel. En 2017 empezó a referirse a los empleados del Gobierno como «el Estado profundo». Usó el término con descuido y de manera indiscriminada. No lo aplicó solo a burócratas de carrera que frenaban o ralentizaban sus políticas. También lo lanzó contra militares de tropa que acudían a los canales oficiales de denuncia, contra empleados de agencias que se negaban a saltarse la ley en su nombre y contra el director del FBI que él mismo había nombrado para supervisar investigaciones penales.

Los autores de Project 2025 admiten que la función pública profesional nació con buenas intenciones. «Los progresistas diseñaron un sistema meritocrático para fomentar la experiencia y proteger a los burócratas de la presión partidista, pero pronto empezó a eximir a los funcionarios de la rendición de cuentas», escriben. A partir de ahí, sostienen que la función pública se inclina

de forma marcada hacia el Partido Demócrata. En el mejor de los casos, no abraza una administración conservadora; en el peor, la considera un adversario. En cualquier caso, los autores lo presentan como una afrenta a la idea de un cuerpo funcionarial que obedezca el mandato de los votantes. Además, recuerdan que los empleados federales cuentan con fuertes protecciones laborales, lo que dificulta apartarlos.

Por eso Project 2025 propone resucitar una orden ejecutiva que Trump firmó al final de su primer mandato. Se la conoce como Schedule F (Anexo F). La orden buscaba reclasificar decenas de miles de puestos de la función pública vinculados de algún modo a la formulación de políticas para tratarlos como si fueran cargos de confianza. Así el presidente podría destituir a sus titulares en cualquier momento. Trump no llegó a aplicarla por completo y Biden la revocó al llegar a la Casa Blanca. El 20 de enero de 2025, Trump la restableció con algunas modificaciones mediante una nueva orden ejecutiva.

James Sherk, que redactó el Anexo F, minimizó el impacto sobre la mayoría de los empleados de carrera. Defendió que la orden permitiría evaluar caso a caso y estimularía al resto para «ponerse las pilas». «La idea de que vamos a despedir a 50 000 personas es una locura. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Eso te deja sin capacidad para aplicar tu agenda. Solo se usará contra los malos trabajadores y los incompetentes», dijo a ProPublica en 2024.

No todo el mundo echa mano a ese nivel de cautela. «Queremos que los burócratas se vean afectados de forma traumática», afirmó Vought en 2023. «Queremos que, cuando se levanten por la mañana, no quieran ir a trabajar porque cada vez se los ve más como los villanos del lugar». En esas condiciones, ni siquiera haría falta despedirlos. Muchos se irían por su cuenta.

En su crítica de la burocracia federal, los autores de Mandate for Leadership señalan un problema que puede ser real. Estadounidenses de todo el espectro político comparten la frustración con los servicios del Gobierno federal. Sin embargo, la solución que proponen, una vez más, probablemente agrave el problema en lugar de aliviarlo. Si el Gobierno sustituye un sistema de méritos que funciona mal por otro basado abiertamente en la

lealtad, relegará la competencia a un segundo plano. Seleccionará a los empleados por sus ideas políticas, no por sus capacidades. Pensemos, por ejemplo, en la principal agencia de salud pública del país, Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC), que la pandemia del coronavirus dejó al descubierto como desorganizada y mal preparada.

Departamento de Justicia

El plan para reformar el Gobierno no solo exige un programa detallado. También necesita un mecanismo para imponerlo. Ahí es donde Project 2025 recurre al Departamento de Justicia (DOJ). Como máxima autoridad policial federal, el DOJ puede ejercer un poder enorme de muchas maneras. De él dependen la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles Federales (USMS) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Sus abogados persiguen los delitos federales, llevan los casos de derechos civiles, comparecen en nombre del Gobierno ante el Tribunal Supremo y representan a otros departamentos en los tribunales.

El DOJ ocupa una posición singular. Forma parte del Ejecutivo y, al mismo tiempo, conserva un margen de autonomía. Su máximo responsable, el fiscal general, responde ante el presidente, igual que varios de sus principales adjuntos. Aun así, el fiscal general no actúa como abogado personal del presidente. Tampoco lleva la mayoría de los asuntos ligados al funcionamiento cotidiano de la Casa Blanca, que recaen en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca (WHCO).

Diversas barreras impiden que el DOJ se convierta en un instrumento de política partidista. La Constitución exige que el presidente «vele por que las leyes se ejecuten fielmente» y la ley obliga al Departamento de Justicia a intervenir en determinados litigios. Además, un conjunto de directrices asentadas desde hace

décadas rige su actuación. La coherencia en la aplicación y en la interpretación de la ley sostiene cualquier sistema que pretenda llamarse Estado de derecho.

Aun así, resulta fácil entender que muchos ciudadanos teman que un presidente convierta el Departamento de Justicia en un arma de guerra política. En más de una ocasión, distintos presidentes han intentado instrumentalizarlo. En 1961, John F. Kennedy nombró fiscal general a su hermano menor, Robert, que no tenía experiencia ejerciendo la abogacía. En la llamada «masacre del sábado por la noche» (Saturday Night Massacre) de 1973, Richard Nixon trató de destituir al fiscal especial que investigaba el Watergate y tanto el fiscal general como su adjunto dimitieron para defender la independencia del Departamento. Tras las elecciones de 2020, varios altos cargos del DOJ llegaron a amenazar con dimitir en bloque ante los intentos de Trump de usar el Departamento para subvertir el resultado electoral. «Ni siquiera nuestros mejores fiscales generales han estado libres de sospechas de que, al ser nombrados políticamente por el presidente, le serían leales por encima de cualquier otro deber», dijo en su día el senador Alan Cranston.

Sin embargo, para pensadores de la derecha como los autores de Project 2025, esa sospecha describe casi un ideal. Consideran inaceptable, desde un punto de vista constitucional, el estatus peculiar del Departamento, integrado en el Ejecutivo más con márgenes de autonomía. «La idea de las agencias independientes, ya se trate de una totalmente independiente como la Comisión Federal de Comunicaciones o una con secciones consideradas independientes, como el Departamento de Justicia, es una idea que rechazamos frontalmente», dijo Vought a la Radio Pública Nacional (NPR) en 2023. Project 2025 sugiere, además, presionar al Tribunal Supremo para que tumbe el precedente de 1935 que respalda la independencia de ciertas agencias.

Trump había llegado por instinto a la misma conclusión mucho antes. En diciembre de 2017 dijo a The New York Times que tenía «el derecho absoluto de hacer lo que quisiera con el Departamento de Justicia». Eso no le impidió, en cuanto dejó el cargo, acusar a Biden de politizar indebidamente el DOJ (Departamento de

Justicia) por las investigaciones sobre sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020 y sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Hasta hoy, no ha trascendido evidencia pública de que Biden ordenara interferencias políticas en esos casos. Project 2025 utiliza esas acusaciones, aunque carezcan de base, para reforzar el argumento de que Trump debe politizar el Departamento.

El capítulo de Project 2025 dedicado al DOJ lo firma Gene Hamilton, un abogado que trabajó en ese organismo así como en el Departamento de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump. Allí desempeñó un papel relevante en el diseño de políticas migratorias, incluida la separación de familias en la frontera sur. Aun así, Hamilton escribe: «El Departamento de Justicia se ha convertido en un organismo del que el 46,6% de los estadounidenses ha indicado recientemente que, en su opinión, es "demasiado político, corrupto y poco fiable"». Más adelante añade: «El restablecimiento de los valores de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, respeto y excelencia del Departamento debe servir como principio rector en todos los frentes».

Una vez más, Project 2025 aprovecha un problema real, la desconfianza de muchos estadounidenses en la imparcialidad del Departamento de Justicia, y pretende resolverlo convirtiéndolo en un órgano todavía menos imparcial. Hamilton sostiene que el DOJ se ha apartado del Estado de derecho, pero basa su lista de cargos casi por completo en relatos poco sólidos, sesgados o directamente erróneos que han sido difundidos por medios conservadores. Además, Trump ha mostrado un desprecio reiterado por el Estado de derecho y ha desacreditado tribunales, jueces y normas jurídicas a lo largo de su carrera. Si a eso se le suman sus promesas constantes de tomar represalias contra sus críticos, resulta fácil ver el riesgo de un Departamento de Justicia convertido en arma. Se atribuye al mariscal peruano Óscar R. Benavides la frase: «Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley».

Desde hace décadas, las directrices internas recomiendan que la Casa Blanca se comunique con el DOJ únicamente a través del fiscal general o del fiscal general adjunto, precisamente para evitar interferencias políticas. Project 2025 propone eliminar esas cautelas

y encajar el Departamento en la agenda política del presidente. «El Departamento se rige por la supervisión y el control directos del presidente de los Estados Unidos como componente del poder ejecutivo», escribe Hamilton. «Por lo tanto, dejando aparte los procesos penales que puedan justificar un trato diferente, las decisiones sobre litigios deben tomarse de manera coherente con la agenda del presidente».

El texto presta una atención especial al control del FBI. La idea no es absurda en sí misma; la agencia arrastra un historial de abusos desde sus orígenes. Por eso, desde 1976 el Congreso fija en diez años el mandato del director del FBI, con el objetivo de protegerlo de presiones políticas y evitar que se repitan excesos como los de J. Edgar Hoover. El problema, otra vez, está en el método y en quién lo aplica. Hamilton escribe que «bajo ninguna circunstancia el FBI debería poder eludir al fiscal general o a los dirigentes del Departamento en cualquier asunto que sea de su competencia». Esa jerarquía tiene sentido si el DOJ opera con distancia respecto de la política partidista, pero se vuelve delicada, por ejemplo, si el FBI investiga al presidente en ejercicio por posibles delitos.

Hamilton también pide eliminar el mandato de diez años. Y Trump ya lo ha vaciado de contenido en la práctica. En 2017 destituyó a James Comey. Más tarde presionó a Christopher Wray, a quien él mismo había nombrado, para que se marchara antes de que expirara su mandato, y Wray anunció que dejaría el cargo cuando Trump tomara posesión en enero de 2025.

En conjunto, estos cambios transformarían el Departamento de Justicia. Pasaría de funcionar con un cierto margen de autonomía a centrarse, ante todo, en respaldar la política de la Casa Blanca. En ese escenario, el FBI y el Departamento de Justicia podrían recibir órdenes de investigar a cualquiera que intentara frenar la agenda del presidente o incluso a cualquiera que lo criticara. Aunque esas investigaciones no acabaran en cargos ni condenas, resultarían costosas y aterradoras para los investigados. Y, además, servirían de aviso para cualquiera que se sintiera tentado a discrepar o a hacer preguntas. Las propuestas de Hamilton pondrían un garrote partidista al final del largo brazo de la ley.

Cuando expertos y académicos han advertido del giro autoritario de

los últimos años, algunos estadounidenses han entendido esas alarmas como si las elecciones fueran a desaparecer en cuanto Trump llegara al poder. Durante la campaña, él mismo alimentó a veces esa idea. En julio de 2024, ante un auditorio cristiano, dijo: «En cuatro años, no tendrán que volver a votar. Lo arreglaremos tan bien que no tendrán que votar». En realidad, el auge del autoritarismo y el deterioro de la democracia en Estados Unidos se parecen más a lo que Project 2025 plantea como hoja de ruta. El movimiento MAGA busca consolidar el poder de Trump, erosionar los contrapesos del Congreso, degradar la experiencia y apartar a cualquiera que pueda oponerse a vulneraciones del Estado de derecho. Los efectos de ese proceso quizá no se perciban de inmediato. Sin embargo, el sistema puede desmoronarse silenciosamente desde dentro.

Falta por ver a qué velocidad ocurre esto. Toda la preparación del mundo vale poco cuando entra en juego el carácter voluble de Donald Trump. Project 2025 examinó a miles de candidatos para una infinidad de puestos, pero, tras las elecciones de 2024, Trump empezó a tomar decisiones de forma caótica y sobre la marcha. La prensa informó de que escogió a Matt Gaetz como fiscal general durante un vuelo de dos horas y de que Gaetz retiró su candidatura solo ocho días después.

Ahora bien, los autores de Project 2025 conocen a Trump y contaban con esa volatilidad. Asumieron que, aunque sus elecciones para los puestos más visibles quizá no fueran las más cualificadas, los escalones inferiores quedarían en manos de adjuntos bien preparados y firmemente comprometidos. Y, además, la vuelta de Vought a la dirección de la OMB lo sitúa en el lugar idóneo para aplicar el plan que él mismo diseñó.

SECCIÓN II

Capítulo 1

Género, familia y derechos

El nacionalismo cristiano de Russell Vought y muchos otros colaboradores de Project 2025 se revela con mayor claridad en temas como género, raza, educación, salud y derechos civiles. El documento concibe una América en la que el aborto es estrictamente ilegal, el sexo está sometido a una vigilancia estrecha, no existen escuelas públicas y la justicia es severa, todo ello de acuerdo con los principios del fundamentalismo cristiano que constituirían la base explícita de sus políticas. Aunque otras ideas de Project 2025 son igual de radicales o incluso más aún, este es el corazón del programa. Son las propuestas más concretas y sentidas, y también las que tendrían los efectos más inmediatos y de mayor alcance sobre la vida cotidiana del mayor número de estadounidenses.

En su prólogo a Mandate for Leadership, Kevin Roberts cita a Ronald Reagan en un discurso del expresidente de 1967: «La libertad es algo frágil y nunca está a más de una generación de su extinción». Muchos estadounidenses podrían estar de acuerdo, pero la forma en que Project 2025 define la libertad resultará alienadora, incluso para muchos votantes de Donald Trump.

«Nuestra Constitución nos concede a cada uno de nosotros la libertad no de hacer lo que queremos, sino lo que debemos», escribe Roberts. Allí donde terminan las promesas de libertad de la Constitución, Project 2025 reclama imponer una serie de obligaciones: someterse a las normas tradicionales de género, con una masculinidad viril y una feminidad recatada, sin términos medios; a una moral sexual ortodoxa; y aceptar la desigualdad racial heredada.

Ninguna de estas cuestiones es novedosa para la derecha. El cristianismo evangélico ha dominado el Partido Republicano durante más de cuatro décadas. La decisión del Tribunal Supremo

de 2022 en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que anuló el derecho constitucional federal al aborto establecido en Roe contra Wade en 1973, devolviendo la autoridad para regularlo o prohibirlo a los estados fue la culminación de décadas de trabajo por parte de los conservadores sociales. Pero los autores de Project 2025 están dispuestos a impulsar públicamente su agenda más allá de lo que suelen hacer los conservadores convencionales, o Trump.

La prioridad número uno de Project 2025 es «restablecer la familia como eje central de la vida estadounidense y proteger a nuestros hijos». Los autores abordan distintos temas, desde la educación hasta la tecnología y la legislación laboral, con esta perspectiva. Siempre que las familias cumplan con la estricta definición que establece Project 2025, es decir, un hombre, una mujer e hijos ajustados a los estereotipos de género, y preferiblemente cristianos, los autores abogan por políticas públicas que den a las familias flexibilidad para elegir cómo se educa a los niños y cómo se ganan la vida los padres (o deciden quedarse en casa). Estas ideas probablemente atraigan un amplio apoyo popular. Sin embargo, centrarse en la familia exige la voluntad de sacrificar los derechos tanto de los individuos como de otras comunidades no familiares ni religiosas. Aunque Roberts afirma que «la centralización del poder político tiene como propósito socavar la familia», Project 2025 aboga por utilizar el poder centralizado del Gobierno federal para imponer la visión de la familia que defiende.

Aborto

Seguramente sea excesivamente cínico decir que el nuevo giro «profamilia» de la derecha no es más que un lavado de cara de las políticas antiaborto, porque sus partidarios están comprometidos con promover su visión de la familia a través de otras políticas, pero la prohibición del aborto sigue siendo su principal prioridad. «La sentencia Dobbs es solo el comienzo», escribe Roberts. «Los conservadores de todos los estados y de Washington, incluida la

próxima administración conservadora, deben presionar lo posible para proteger a los “no nacidos” en todas las jurisdicciones de Estados Unidos». En su mayor parte, los escenarios en los que se articularía este empuje son el Congreso, donde tendría que originarse cualquier prohibición federal; el Tribunal Supremo y otros tribunales, en los que los conservadores han trabajado durante años para incorporar juristas provida; y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). «Para bien o para mal, las actividades del HHS afectan personalmente a más estadounidenses que las de cualquier otra agencia federal», escribe Roger Severino.

Severino es un fanático antiaborto, una descripción que probablemente él no consideraría peyorativa. Americano de primera generación y católico devoto, comenzó su carrera jurídica en el Becket Fund for Religious Liberty, una organización conservadora sin ánimo de lucro que litiga para conseguir exenciones legales para organizaciones religiosas. Pasó años en el Departamento de Justicia, incluso bajo la presidencia de Barack Obama, antes de dirigir la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la primera presidencia de Trump. Su esposa, Carrie Severino, también es una destacada abogada provida que ha trabajado para impulsar la confirmación de jueces conservadores en los tribunales federales.

La preocupación de Roger Severino por el aborto se asoma en casi cada página de su capítulo, y ve margen para impulsar políticas provida en ámbitos donde muchos no lo esperarían. Su principal objeción a las órdenes federales de vacunación contra la COVID-19 es que, para desarrollar y probar esas vacunas se utilizaron líneas celulares fetales (procedentes de abortos voluntarios en las décadas de los 70 y los 80). Aunque el Vaticano emitió un comunicado en el que consideraba las vacunas «moralmente aceptables», Severino no lo considera así. «Nunca hay justificación para acabar con la vida de un niño como parte de una investigación», escribe. Si bien pide que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS se traslade al Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, se apresura a añadir: «Independientemente de donde residan las funciones de la ORR, su personal y proveedores de atención médica nunca deberían estar autorizados a facilitar abortos a menores no acompañados bajo su custodia».

Muchas de sus propuestas son aún más directas. En primer lugar: Severino quiere prohibir la prescripción de medicamentos abortivos a través de la telemedicina[9], prohibir su envío por correo y revertir la aprobación de estos fármacos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Dado que casi dos tercios de los abortos realizados en Estados Unidos en 2023 fueron farmacológicos (es decir, sin intervención quirúrgica), una medida así restringiría gravemente el acceso a mujeres que quieren abortar. El aborto farmacológico se ha vuelto más común desde que el fallo Dobbs provocó el cierre de clínicas de aborto en muchos estados (de hecho, las tasas de aborto a nivel nacional aumentaron ligeramente después de la sentencia Dobbs). Para las mujeres que buscan abortar en estados con prohibiciones, estos medicamentos son esenciales. Para los conservadores provida, son una atrocidad moral y un vacío legal que hay que atajar.

«Las píldoras abortivas representan la mayor amenaza para los niños no nacidos en un mundo posterior a Roe», escribe Severino. Afirma que el aborto farmacológico tiene una tasa de complicaciones cuatro veces superior a la del quirúrgico, aunque esa cifra parece basarse en un artículo que la revista retiró formalmente del registro científico tras la publicación de Mandate for Leadership. Severino sostiene que la autorización de la FDA siempre fue ilegal. En 2024, el Tribunal Supremo rechazó una impugnación conservadora a la aprobación por motivos de legitimación.

Sin embargo, Project 2025 va más allá al afirmar que el Gobierno federal debería impedir el envío por correo de medicamentos abortivos mediante la aplicación de la Ley Comstock (Comstock Act) de 1873, que prohíbe el envío de «todo artículo obsceno, lascivo, indecente, soez o vil», así como de material relacionado con el aborto (anteriormente prohibía el envío por correo de algunos anticonceptivos). Con la sentencia Roe en vigor, las partes de la ley relacionadas con el aborto quedaron obsoletas, y los activistas ahora la ven como una vía para prohibir la mayoría de los abortos farmacológicos. «Permitir los abortos por correo es un regalo para la industria del aborto», escribe Severino. Tras la sentencia Dobbs, los gobiernos de estados azules —gobernados por demócratas— y otros grupos comenzaron a acumular reservas de fármacos abortivos

como medida de precaución ante una eventual aplicación de la Ley Comstock.

Mientras el aborto siga siendo legal en algún punto de Estados Unidos, Severino quiere instaurar una agresiva vigilancia gubernamental de esta práctica. «Dado que los estados liberales se han convertido ahora en santuarios para el turismo abortivo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería utilizar todas las herramientas a su alcance, incluida la reducción de fondos, para garantizar que cada estado informe con exactitud del número de abortos que se practican dentro de sus fronteras, la edad gestacional del feto, el motivo, el estado de residencia de la madre y el método utilizado», escribe. En el mejor de los casos, esto se convertiría en un medio de intimidación. En el peor, permitiría al Gobierno federal contribuir al procesamiento de las mujeres censadas en estados con prohibición del aborto que lo hayan practicado en otro. En una opinión anexada a la sentencia Dobbs, el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh escribió que, aunque los estados no pueden prohibir los viajes para abortar, algunas jurisdicciones lo están intentando de todos modos.

Severino quiere revocar una norma de la Administración Biden que permitía a los estados que autorizan el aborto el uso de fondos de Medicaid para pagar el procedimiento a residentes de otros estados. También desea recortar la financiación federal al programa de planificación familiar Planned Parenthood. La legislación vigente prohíbe que se destinen fondos federales al aborto (en la mayoría de los casos), pero este programa ofrece una amplia gama de otros servicios de salud reproductiva. Los conservadores argumentan que, dado que el dinero es fungible, cada dólar que el Gobierno federal envía a Planned Parenthood libera fondos para el aborto, pero los esfuerzos realizados en el pasado para retirar la financiación a la organización se han estrellado en el Congreso. Project 2025 también impediría que el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) proporcionara acceso al aborto.

Severino busca alinear la investigación médica federal con los objetivos provida. El HHS establecería un comité de ética de la era Trump para supervisar la investigación que utiliza tejido fetal derivado de abortos y presionaría al Congreso para prohibir esa

práctica. La investigación del HHS exploraría «los daños, tanto mentales como físicos, que el aborto ha causado a las mujeres y las niñas», mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) «deberían financiar estudios sobre los riesgos y las complicaciones del aborto». Esto no solo inyecta política en la ciencia, sino que parece predeterminar las conclusiones.

Project 2025 es ligeramente más abierto a los métodos anticonceptivos que al aborto, aunque sugiere prohibir la píldora del día después como posible abortiva. Tanto algunos investigadores médicos como la FDA han revelado que la píldora del día después previene, mas no interrumpe, el embarazo; aproximadamente una cuarta parte de las mujeres estadounidenses lo han utilizado al menos una vez, según los CDC. El HHS también garantizaría que los grupos religiosos no tengan que cumplir con la obligación de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, que obliga a cubrir los costes de los anticonceptivos de sus empleados.

Asimismo, el HHS presionaría para restituir la educación basada exclusivamente en la abstinencia. Dado que estos programas se intentaron implementar durante la era de George W. Bush y dieron resultados insatisfactorios, sus promotores los han rebautizado como «Prevención de riesgos sexuales». Independientemente del nombre, el objetivo es el mismo: subordinar la salud basada en evidencias científicas a las creencias religiosas. Severino considera que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid deberían garantizar que los programas de abstinencia reciban fondos federales y «todas las oportunidades para demostrar su eficacia», mientras que «cualquier programa que presente una propuesta que promueva el riesgo en lugar de la salud no debería ser considerado a la hora de recibir financiación». La promoción del riesgo parece incluir aquí alguna mención sobre los métodos anticonceptivos. Otra postura firme sobre el sexo: «La pornografía debería estar prohibida», escribe Roberts. «Las personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas».

Prohibir el aborto implicaría que más niños fueran dados en adopción, y Severino quiere relajar las restricciones impuestas a las agencias de adopción confesionales que han perdido sus licencias o afrontado demandas judiciales por negarse a entregar niños en

adopción a parejas homosexuales o a otras familias que ellos desaprueban por motivos religiosos.

Política familiar

El énfasis en las parejas heterosexuales, casadas y procreadoras está presente en todo el documento. «Las familias compuestas por una madre y un padre casados con sus hijos son la base de una nación bien ordenada y una sociedad sana», escribe Severino. Sostiene que el Gobierno federal debería apoyar a las organizaciones que «mantienen una definición del matrimonio y la familia basada en la Biblia y reforzada por las ciencias sociales», afirmando que otras formas de familia son menos estables. Su afirmación de que «la duración media de los matrimonios entre personas del mismo sexo es la mitad que la de los matrimonios heterosexuales» no está respaldada por datos. El objetivo no es solo moral; tanto él como otros autores también lo presentan como un camino hacia la estabilidad financiera y el progreso de las familias.

Los cambios en las normas relativas a los planes de jubilación conocidos como 401(k) y en otros programas de ahorro también podrían fomentar el matrimonio. El HHS recurriría a iglesias y otras organizaciones religiosas para «proporcionar orientación sobre matrimonio y crianza a padres con bajos ingresos», lo que «reafirmaría y enseñaría a los padres, basándose en una comprensión biológica y sociológica de lo que significa ser padre, no un progenitor neutro en cuanto al género, a partir de las ciencias sociales, la psicología, testimonios personales, etcétera». A través de programas educativos, incentivos fiscales y otros instrumentos, el sistema de pensión alimenticia «debería fortalecer el matrimonio como norma, restaurar los hogares rotos y animar a las parejas no casadas a comprometerse con el matrimonio». El programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) haría un seguimiento del «matrimonio, la formación saludable de familias y el retraso de las relaciones sexuales para evitar embarazos».

En esta visión, los hombres son los sustentadores de la familia y las

mujeres son madres. «Sin mujeres, no hay hijos y la sociedad no puede continuar», escribe Max Primorac. El Departamento de Trabajo «se comprometería a estudiar con honestidad los retos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral» y trataría de «comprender las verdaderas causas de las brechas salariales entre hombres y mujeres», afirma Jonathan Berry. Una vez más, esto suena mucho a investigación con un resultado predeterminado al servicio de la familia tradicional. Finalmente, en un caso en el que cierta izquierda neo-hippie encuentra un punto en común con la derecha natalista, Severino quiere que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a doulas.

Bajo el programa de autores, el Departamento de Trabajo elaboraría datos mensuales sobre «la situación de la familia estadounidense y su bienestar económico», y el Departamento de Educación proporcionaría datos de los estudiantes clasificados según la estructura familiar. El Departamento de Trabajo institucionalizaría la observancia religiosa al solicitar al Congreso un plus del 50% en el Sabbat. El día predeterminado sería el domingo, pero la norma contemplaría alternativas como el Sabbat judío, que va desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. También pediría al Congreso que las empresas permitieran a los trabajadores acumular tiempo libre remunerado cuando trabajaran horas extras, en lugar de pagarles un plus. Jonathan Berry, en un artículo sobre el Departamento de Trabajo, quiere que el Congreso cree incentivos para ofrecer guarderías en el lugar de trabajo, mientras que Severino prefiere que el Gobierno pague a los padres (probablemente a las madres) para compensar el costo del cuidado de los niños, o que pague el cuidado en el hogar por parte de familiares. Esta medida se contrapone a las guarderías universales, que muchos en la derecha consideran un incentivo para que las mujeres salgan a trabajar en lugar de quedarse en casa con los niños.

Para dirigir y coordinar estas políticas, la Casa Blanca crearía un cargo de alto rango, y el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, establecido por Joe Biden, sería eliminado, posiblemente convertido en tabú. En su lugar, la Administración instauraría una batería de cambios diseñados para recortar los derechos de las personas trans, instarlas a ellas y a las no binarias a la

clandestinidad y exponerlas a la discriminación en el trabajo, en la escuela y en las demás facetas de sus vidas. Su mera existencia sería borrada de la nomenclatura del Gobierno federal. «En el pasado, la palabra «género» era una alternativa cordial a la palabra «sexo» o al término «sexo biológico»», escribe Primorac. «La izquierda se ha apropiado del término «género», que solía significar «masculino» o «femenino», para incluir un espectro de otras personas que buscan alterar las normas sexuales biológicas y sociales». Project 2025 pondría fin a esto. La Comisión de Oportunidades Laborales derogaría cualquier norma que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, condición transgénero y características sexuales, lo que abriría la puerta a una amplia gama de discriminaciones legales. Estas normas, que se establecieron por primera vez en 1964 y se han ampliado desde entonces, protegen a las personas de la discriminación en el trabajo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) revertiría una definición de sexo que abarca la identidad de género y la orientación sexual. El Instituto Nacional de Salud, que según Severino ha promovido «ciencia de género basura», financiaría estudios diseñados para socavar la transición de género, o «intervenciones de cambio de sexo», como él las denomina. El Departamento de Educación eliminaría una categoría de datos para el género no binario y definiría «sexo» en el Título IX, la Ley Fundamental contra la Discriminación en la Educación, «como el sexo biológico reconocido al nacer». El Departamento de Asuntos de los Veteranos suspendería las cirugías de reasignación de género.

Trump adoptó medidas en algunos de estos frentes inmediatamente después de su segunda toma de posesión, incluyendo órdenes ejecutivas para «reconocer dos sexos, masculino y femenino» y prohibir el uso de fondos federales para la atención sanitaria de reafirmación de género para cualquier persona menor de diecinueve años. Él junto con otros líderes y grupos han convertido los ataques contra las personas trans y las expresiones no tradicionales de género en un pilar de la política de derecha en los últimos años. Han difundido desinformación sobre las personas trans y han sembrado el pánico ante la posibilidad de que los niños adopten identidades de género o nombres diferentes en la escuela. Esta feroz reacción es intolerante y maliciosa, y también extravagante: las

personas transgénero representan menos del 2% de la población y su presencia no afecta de manera evidente a la vida de otras personas. El contexto cristiano y profamilia de Project 2025 ayuda a explicar por qué la derecha los considera una amenaza tan grande. Una cosmovisión que ve los roles de género firmemente delimitados e inmutables no puede reconocer la existencia de las personas trans ni nada que contemple una alternativa a la estricta separación entre hombre y mujer.

Educación

Los padres y la familia también ocupan un lugar central en los planes establecidos en el manual de la Heritage Foundation para un cambio drástico en la política educativa federal.

«Aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y otros tribunales federales han reconocido sistemáticamente que los padres tienen el derecho y el deber de dirigir el cuidado y la educación de sus hijos, no siempre han tratado los derechos parentales como iguales a otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el libre ejercicio de la religión», escribe Lindsey M. Burke. Esto se debe probablemente a que, a diferencia de la libertad de expresión y de religión, no figuran en la Carta de Derechos de los Estados Unidos. No obstante, los derechos de los padres a determinar qué aprenden sus hijos, cómo lo aprenden y dónde, se han convertido recientemente en una causa importante para la derecha.

El objetivo final de los autores de las propuestas educativas de Project 2025 es acabar con la escuela pública tal y como la conocemos. «El próximo presidente debería promover oportunidades educativas fuera del sistema de educación pública, dominado por la agenda woke», escribe Roberts. Burke añadió que «la política de educación primaria y secundaria debe seguir el camino trazado por Milton Friedman en 1955, en el que la educación se financia con fondos públicos, pero las decisiones educativas las toman las familias».

En este paradigma, el dinero de los contribuyentes se entregaría a las familias en forma de vales o cuentas de ahorro que podrían utilizar para pagar escuelas religiosas u otras escuelas privadas, lo que poco a poco iría mermando la base de financiación que necesitan las escuelas públicas para mantener sus estándares educativos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también pondría fin al programa Head Start de educación infantil, que atiende a cientos de miles de familias y niños de bajos ingresos. A corto plazo, el Departamento de Educación flexibilizaría las restricciones a las escuelas concertadas, otra alternativa a la enseñanza pública.

A largo plazo, no habría ningún Departamento de Educación. «La política educativa federal debería ser limitada y, en última instancia, el Departamento de Educación federal debería eliminarse», escribe Burke. Las bases conservadoras atacan a menudo al Departamento por su supuesta capacidad para imponer los planes de estudio en todo el país, pero eso no es cierto. En realidad, el Departamento actúa sobre todo como una fuente de financiación para los sistemas educativos estatales y locales. Ahora bien, al vincular esos fondos a determinadas condiciones, el Gobierno federal sí puede exigir que se cumplan ciertos estándares y normas.

Burke suprimiría el Departamento pero mantendría el flujo de dinero. «Los fondos existentes deberían enviarse a los estados en forma de subvenciones sobre las que tengan pleno control, permitiendo a los estados destinar fondos federales a cualquier fin educativo lícito según la legislación estatal», escribe. Esto probablemente supondría grandes disparidades en la educación entre los estados republicanos y los demócratas. Los estados progresistas podrían mantener sus sistemas más o menos como hasta ahora. Los conservadores podrían ceder la educación a grupos religiosos u otras organizaciones sin ánimo de lucro y educar a los estudiantes en doctrinas religiosas, con una perspectiva histórica revisionista que minimice el racismo y otras partes oscuras de la historia de Estados Unidos y del mundo, y con escepticismo sobre el cambio climático y la evolución.

Los argumentos de Burke se vuelven pronto confusos y

contradictorios. Por ejemplo, señala que las calificaciones de las pruebas recientes en Estados Unidos han sido malas y están empeorando (aunque las caídas recientes están claramente relacionadas con la disrupción causada por la COVID-19). Dado que las autoridades estatales y locales son los responsables de la enseñanza y el plan de estudios, ¿por qué deberíamos suponer que otorgarles más poder mejoraría los resultados?

Y, en todo caso, ¿por qué los contribuyentes federales deberían enviar enormes cantidades de dinero a los estados sin ningún control sobre cómo se gastan? Burke ve claro por qué esto es imprudente en determinados contextos, como cuando se queja de que deberían eliminarse las subvenciones para los programas de «estudios de área» sobre culturas y regiones en colegios y universidades porque «a veces financian programas que van en contra de los intereses [estadounidenses]». La principal diferencia parece ser, sencillamente, qué conjunto de políticas le resulta más aceptable.

De ahí que, en otros ámbitos, Burke abogue por recortar drásticamente las ayudas financieras federales. El Gobierno federal lleva mucho tiempo garantizando los préstamos estudiantiles, pero desde 2010 comenzó a ofrecerlos directamente a particulares. El Proyecto propone devolver los préstamos al sector privado, eso a pesar de que los créditos estudiantiles abusivos del sector privado han sido un problema grave. El programa Condonación de Préstamos del Servicio Público, que permite perdonar la deuda a cambio de prestar servicios en el sector público, desaparecería. Se revocarían las medidas de la Administración Biden para condonar la deuda estudiantil, que eliminaron alrededor de 180 000 millones de dólares de deuda de casi cinco millones de estadounidenses. El Gobierno federal se implicaría mucho menos en la educación más allá de la secundaria, pero Burke sostiene que la política federal debería fomentar alternativas como los programas de aprendizaje, los centros de formación profesional y las academias militares.

Sanidad

Durante años, los conservadores han exigido la eliminación de Obamacare (ACA), pero el apoyo público a sus disposiciones convierte una derogación total en un suicidio político. En lugar de eso, Project 2025 propone desmantelar piezas de la ley dentro de un esfuerzo más amplio por privatizar Medicare, recortar Medicaid y limitar las protecciones federales para los pacientes. «El deficiente sistema de seguros de Estados Unidos, que funciona en gran medida a través de confusas redes de proveedores y pagadores terceros (los empleadores), induce al consumo excesivo de asistencia sanitaria, limita las opciones de los consumidores y oculta los verdaderos costes a los pacientes», escribe Severino. Es un diagnóstico que el senador Bernie Sanders podría haber firmado, pero las soluciones que ofrece el manual conservador son, como era de esperar, bastante diferentes.

El Proyecto fomentaría el uso de la atención primaria directa, un modelo de suscripción que prescinde por completo de los seguros, dentro del marco de Obamacare. Además, facilitaría el ahorro a las personas que buscan proveedores más económicos. «Con los seguros tradicionales, los pacientes que eligen una atención menos costosa no se benefician económicamente de esa elección», escribe Severino, pero esa lógica también puede llevar a los pacientes a recortar cuidados. También quiere separar los seguros subvencionados por la ACA del mercado de seguros no subvencionados, reduciendo las regulaciones sobre estos últimos. En conjunto, estos cambios acercarían la atención sanitaria al mundo anterior a la ACA, en el que el incentivo principal para muchas personas era evitar los gastos sanitarios en la medida de lo posible, aunque al final eso se tradujera en más gasto o en peores resultados cuando, por fin, buscaban atención.

Severino pretende privatizar sustancialmente Medicare, el plan de salud para las personas a partir de los 65 años, al convertir Medicare Advantage en la opción predeterminada. Este programa permite a los afiliados elegir entre un conjunto de planes de seguro privados que luego paga el Gobierno; alrededor de la mitad de los estadounidenses con derecho a Medicare utilizan Medicare Advantage. Al igual que otros planes de salud privados, este tiene

ventajas —como ofrecer planes oftalmológicos y/o dentales; reducción del gasto directo—, y desventajas —como redes limitadas y denegaciones de cobertura—. Aunque uno de los objetivos declarados del Proyecto es «garantizar la sostenibilidad y el valor para los beneficiarios y los contribuyentes», Medicare Advantage en realidad cuesta más al erario por afiliado que el Medicare tradicional, y la propia Comisión de Supervisión del Gobierno ha declarado que no puede determinar si los usuarios están recibiendo una mejor atención.

Project 2025 también plantea recortes a Medicaid, el programa público de cobertura sanitaria para personas con bajos ingresos. Tras declarar que el sistema actual no funciona, Severino anuncia que los beneficiarios de Medicaid también deben aportar algo: «deberían tener tanto la libertad de elegir sus planes de salud como la responsabilidad de contribuir a los costes de su atención médica en un nivel adecuado para proteger a los contribuyentes». Añadiría requisitos laborales y ajustaría las prestaciones a las necesidades; también establecería plazos temporales o de por vida a los servicios ofrecidos «para desincentivar la dependencia permanente». Además, intentaría reducir el gasto total mediante transferencias globales a los estados o mediante topes de gasto. Severino no cuantifica el impacto presupuestario de ninguna de estas medidas, pero el resultado obvio sería una reducción de las prestaciones, quizá drástica.

Los veteranos que reciben asistencia sanitaria pública se enfrentarían a cambios similares. Sobre el Departamento de Asuntos de los Veteranos, Brooks D. Tucker señaló que pronto se producirá «un cambio generacional significativo en el conjunto de su población de pacientes» en un futuro próximo. Con el objetivo de prepararse para un grupo de usuarios más envejecido y más costosos, endurecería el acceso a las prestaciones por discapacidad y trataría de derivar a más beneficiarios hacia las Redes de Atención Comunitaria (CNN), una alternativa a los centros del Departamento que, en la práctica, privatiza partes del sistema.

La COVID-19 acecha el enfoque del Project 2025 sobre la salud pública. «El aparato de salud pública del Gobierno federal ha perdido la confianza de la ciudadanía», escribe Severino. «Antes de la próxima emergencia nacional de salud pública, este aparato debe

reestructurarse de manera fundamental para garantizar una respuesta transparente, con base científica y más ágil, eficiente, transparente [sic] y específica». Severino sospecha que «la investigación viral gain–of-function[10] financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), pudo haber sido la responsable de la COVID-19».

Esta preocupación por la confianza pública es prudente, pero la pregunta es adónde conduce. El Proyecto dividiría los CDC en dos entidades diferentes: una encargada de recopilar datos epidemiológicos y otra encargada de formular recomendaciones y políticas de salud pública, lo que él denomina una «función ineludiblemente política». Su ejemplo del tipo de concesiones necesarias en las decisiones de salud pública es, inevitablemente, invocar cómo la COVID-19 afectó a las celebraciones de Pascua en 2020: «¿Cuánto vale la mitigación del riesgo en comparación con el precio de cerrar las iglesias en el día más sagrado del calendario cristiano?». También restringiría la capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para declarar emergencias de salud pública de duración indefinida. Estos cambios servirían mejor a los objetivos culturales del manual conservador, pero no es obvio que generen más confianza o mejores resultados en materia de salud.

Algunas de las sugerencias de Project 2025 parecen sensatas. A Severino le preocupan las estrechas relaciones existentes entre las agencias de salud pública y las empresas farmacéuticas, los propietarios de hospitales y las compañías de seguros. Critica los conflictos de intereses en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los NIH y aboga por un periodo de «enfriamiento» de hasta quince años antes de que los reguladores federales puedan trabajar para las empresas que han regulado. Sin embargo, si dicha reforma no garantiza también buenos salarios para los reguladores, se corre el riesgo de que se produzca una fuga de cerebros en las agencias federales.

Severino facilitaría la llegada al mercado de versiones genéricas de medicamentos, pero también suprimiría las nuevas competencias federales con el fin de negociar los precios de los medicamentos ofrecidos a los pacientes de Medicare. Sus recomendaciones para

resolver la creciente crisis de acceso a los proveedores de salud en las zonas rurales son decepcionantemente vagas y triviales: «Reducir la carga regulatoria y dar rienda suelta a la innovación privada que pueda descubrir soluciones a las necesidades locales específicas». Por otra parte, Project 2025 pretende eliminar por completo las conocidas directrices dietéticas que publican el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Agricultura.

Raza

La identidad de género puede ser el mayor espantajo para los autores de Project 2025, pero la diversidad, la equidad y la inclusión en materia racial también les obsesionan. Proponen una serie de medidas destinadas a desmantelar tanto iniciativas recientes como políticas federales de larga trayectoria orientadas a combatir la discriminación racial. Esto se llevaría a cabo por dos vías principales. La primera es eliminar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en todo el poder ejecutivo, y el segundo es convertir las oficinas del Gobierno federal creadas para luchar contra la discriminación racial en armas de la ideología de derecha.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) dejaría de dar prioridad a la lucha contra la discriminación racial y «reorientaría sus prioridades hacia las denuncias por falta de atención a la discapacidad, la religión y el embarazo (pero no al aborto)». La Administración presionaría al Congreso para que prohibiera a la EEOC recopilar datos sobre la raza en el empleo, tanto en el sector público como en el privado, lo que haría invisibles las disparidades raciales o la discriminación en el trabajo. De hecho, el Proyecto sostiene que «las disparidades no implican (y no deberían implicar legalmente) discriminación per se». La Comisión dejaría claro que sus directrices son puramente consultivas, no normativas vinculantes y dejaría de cerrar acuerdos judiciales que obligan a cumplir determinadas medidas, los

llamados consent decrees.

La agenda del Departamento de Educación para «salvaguardar los derechos civiles» implicaría imponer una «comprensión adecuada» de la «ideología de género» y la raza, lo que en la práctica significaría impulsar normas tradicionales basadas en creencias religiosas. El Departamento respaldaría la prohibición de la teoría crítica de la raza, pero dado que se trata de una teoría académica especializada, eso probablemente equivaldría a prohibir una amplia gama de debates sobre la raza y la discriminación en las escuelas, que es lo que ha ocurrido cuando se han aprobado prohibiciones de este tipo a nivel estatal.

Con una cruel ironía, el Departamento de Justicia utilizaría su División de Derechos Civiles como un arma contra las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), y procesaría a cualquier entidad que las aplique por incurrir en discriminación. El Departamento de Justicia alejaría la aplicación de la ley electoral de su enfoque histórico para prevenir la discriminación racial en las votaciones y en su lugar haría hincapié en el problema ilusorio del fraude electoral propagado por Trump y sus aliados. Las ideas expuestas en esta sección son prioridades especialmente importantes para el presidente Trump en su segundo mandato. Cuando regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, muchas de sus primeras medidas consistieron en atacar los programas de DEI en todo el Gobierno federal, siguiendo con frecuencia las sugerencias de Project 2025.

Otros derechos

Los conservadores han defendido históricamente que las comunidades locales son las que mejor saben cómo gobernarse a sí mismas y que el Gobierno federal debería concederles amplia autonomía en muchas cuestiones. Esta idea aparece en Project 2025 en relación con cuestiones sobre política educativa o Medicaid. Sin embargo, el documento también contempla una nueva imposición radical del poder federal sobre los cuerpos de seguridad locales.

Durante la última década, algunos lugares —especialmente ciudades y condados de tendencia progresista— han elegido fiscales de distrito que han utilizado sus cargos para combatir el encarcelamiento masivo y las disparidades raciales en la actuación policial. También se han negado a procesar algunos delitos de drogas y establecido jurisdicciones «santuario» que no colaboran en la aplicación de las leyes federales de inmigración. En virtud del federalismo estadounidense, los sistemas judiciales estatales y locales son independientes del Gobierno federal, y los fiscales tienen amplia autoridad para elegir qué delitos procesar, ya que no pueden imputar todos los delitos posibles cometidos en sus jurisdicciones. Project 2025, sin embargo, propone utilizar el Departamento de Justicia para demandar a los funcionarios locales que se nieguen a aplicar algunas leyes.

La ley federal prohíbe la marihuana, pero a medida que los estados han ido legalizando el consumo de cannabis, las administraciones de Obama y Trump no se han molestado, por lo general, en perseguir esas infracciones a nivel federal. El Proyecto tomaría medidas enérgicas para que el Departamento de Justicia «procese con rigor todas las actividades interestatales relacionadas con las drogas, incluida la simple posesión de cantidades susceptibles de distribución».

El Proyecto también eliminaría toda la financiación federal para la Corporación de Radiodifusión Pública, que financia la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión de la Televisión (PBS). «El Gobierno federal no solo tiene una deuda de billones de dólares y no puede permitirse el lujo de malgastar más de quinientos millones de dólares al año en opiniones de izquierdas, sino que tampoco debería obligar a la mitad conservadora del país a pagar por la supresión de sus propias opiniones», escribe Mike González, aunque la única prueba que ofrece del sesgo en la cobertura son encuestas de opinión sobre las opiniones políticas de los consumidores de NPR y PBS. Con todo, González iría más allá de la simple retirada de fondos: también revocaría los privilegios otorgados a NPR y PBS bajo la ley federal para fomentar las emisoras educativas no comerciales.

Con un poco de imaginación, podemos vislumbrar cómo sería vivir

en los Estados Unidos donde, según Kevin Roberts, somos libres de hacer lo que debemos, o más bien, lo que Roberts y sus coautores creen que debemos hacer. Es una visión nacional declaradamente cristiana, pero que sigue una corriente moderna, específica y estrecha del cristianismo. En muchos aspectos, recuerda a la vida en la década de los 50. Mientras los padres trabajan, las madres se quedan en casa cuidando de familias numerosas, lo cual es una suerte, ya que no hay programas educativos de televisión para los niños. En la escuela, aprenden valores y lecciones anticuados. El aborto es ilegal, las vacunas son voluntarias y el Estado tiene una participación mínima en la atención sanitaria. El Gobierno se desentiende de la discriminación racial, salvo en sus expresiones más flagrantes. Las personas trans y homosexuales existen, como siempre han existido, si bien se les anima a permanecer en el armario. Es una visión que sugiere que Reagan tenía razón: la libertad es realmente algo frágil.

Capítulo 2

Inmigración y seguridad fronteriza

Ningún tema ha definido tanto la carrera de Donald Trump ni ha entusiasmado tanto a sus votantes como la seguridad fronteriza. Desde su primera aparición como candidato presidencial en 2015, ha demonizado a los inmigrantes (a menudo en términos claramente racistas) y ha prometido impedir que la gente entre en Estados Unidos, no solo deteniendo y deportando a los inmigrantes indocumentados, sino también limitando la inmigración legal.

La inmigración fue el tema central de la primera campaña presidencial de Donald Trump, quien a menudo sugería que un líder con la voluntad suficiente podría cerrar el paso en la frontera. Una vez en el cargo, se dio cuenta de que era más difícil de lo que pensaba. Su Administración se vio dividida por disputas entre los partidarios de una línea dura, como Stephen Miller[11], y otros colaboradores que querían reducir la inmigración ilegal, pero tenían dificultades para cumplir las órdenes de Trump sin infringir la ley. Durante cuatro años, Trump probó una serie de medidas con resultados inconsistentes y un apoyo público variable, incluyendo la separación de familias en la frontera y un muro mal construido e ineficaz a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Nada de esto detuvo el flujo de inmigrantes. Trump aumentó las detenciones en la frontera, si bien deportó a menos personas que Barack Obama.

Solo la COVID-19 marcó una gran diferencia. A principios de 2020, los viajes internacionales se paralizaron y la administración Trump utilizó una ley de salud pública ya existente llamada Título 42 para cerrar efectivamente gran parte de la frontera. Esto permitió a Estados Unidos rechazar a los migrantes que entraban al país sin darles la oportunidad de solicitar asilo, algo a lo que cualquier persona que llegue al territorio estadounidense tiene derecho según la legislación nacional e internacional. El Título 42 permaneció en

vigor hasta 2023, cuando la Administración Biden puso fin a las emergencias de salud pública relacionadas con la COVID-19. El Gobierno informó de que había rechazado a 2,8 millones de personas en virtud del Título 42, aunque es posible que algunas hayan intentado volver a cruzar la frontera más tarde.

El Proyecto se enfrenta al mismo reto básico en materia de inmigración que Trump en su primer mandato. El sistema de inmigración de Estados Unidos está, según el consenso casi universal, muy deteriorado. Los presidentes desde George W. Bush han intentado reformarlo y promulgar sus propias prioridades políticas, pero los problemas más importantes escapan al control de la Casa Blanca. Entre ellos se encuentran un sistema de asilo con falta de personal para gestionar el retraso en las solicitudes y la necesidad de una vía con el fin de obtener la ciudadanía para las personas que ya se encuentran en el país de forma ilegal, pero que están profundamente integradas en Estados Unidos. Solo el Congreso puede solucionar estos problemas, pero varios intentos de reforma migratoria integral han fracasado, ya que ni los demócratas ni los republicanos están dispuestos a hacer las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo. El Gobierno también tiene un control limitado sobre los factores que impulsan a las personas a llegar a los Estados Unidos, entre ellos, mejores oportunidades económicas, agitación política u opresión en sus países de origen, así como desastres naturales.

La solución preferida del Proyecto, como ya hemos visto, es otorgar al poder ejecutivo la mayor cantidad de poder posible. Utilizando las opciones establecidas en Project 2025, la Administración Trump podría tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y legal por igual. El plan aumentaría drásticamente las deportaciones de inmigrantes no autorizados, al tiempo que utilizaría otros medios para hacer la vida desagradable a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal, y castigaría a los estados que no cooperaran. También podría revocar la situación legal de algunos inmigrantes a los que se les ha permitido entrar en Estados Unidos e impedir que más personas entren legalmente, aunque algunos de los métodos que establece son de dudosa legalidad o constitucionalidad.

En conjunto, estos cambios supondrían un cambio radical en el

funcionamiento del control de la inmigración en Estados Unidos, convirtiendo a un país famoso por su población inmigrante en uno mucho más duro y menos hospitalario. La Administración Trump parece contar con el apoyo público para al menos algunos de estos cambios: un número cada vez mayor de estadounidenses desea que haya menos inmigración y una mayor seguridad fronteriza. Sin embargo, algunas de estas medidas podrían perjudicar a la economía, y no está claro que vayan a reducir el número de inmigrantes en Estados Unidos hasta alcanzar la cifra exigida por Trump.

Los votantes también han reaccionado negativamente ante el terrible coste humano de propuestas como las de Project 2025. En 2017 y 2018, Trump instauró una política de separación de niños y adultos en la frontera. El objetivo explícito era disuadir a las familias de intentar entrar en Estados Unidos, pero las historias, imágenes y grabaciones de niños pequeños y bebés separados de sus padres, recluidos en centros de detención precarios con falta de personal, conmocionaron y repugnaron a la nación. Incluso los partidarios de las restricciones se echaron atrás y Trump tuvo que cancelar la medida. El daño que causó sigue presente. Miles de niños fueron separados de sus padres, y algunos aún no se han reunido con ellos. El debate sobre la política de inmigración (incluyendo el que se lleva a cabo en estas páginas) puede ser desapasionado, y acabar centrándose en estadísticas, sistemas y estatutos, pero la separación familiar fue un recordatorio de que se trata fundamentalmente de seres humanos.

El capítulo del Proyecto sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue escrito por Ken Cuccinelli, un exfuncionario de la Administración Trump con una historia curiosa. Conservador social ferviente y activista anti LGBTQ+, se presentó sin éxito a gobernador de Virginia en 2013. Durante la primera Administración Trump, ocupó el cargo de director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y subsecretario en funciones del DHS, aunque ambos nombramientos fueron posteriormente declarados ilegales.

Cuccinelli comienza con una idea sorprendente: abolir por completo el DHS para crear una agencia que supervise las fronteras y la

inmigración, y dispersar otras oficinas por todo el poder ejecutivo. El Congreso creó el Departamento tras los atentados del 11-S, reuniendo a toda una serie de entidades vagamente relacionadas entre sí: diversas oficinas relacionadas con las fronteras y la inmigración, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la recién creada Administración de Seguridad en el Transporte. Cuccinelli considera que esto es un fracaso: «Las diferentes misiones de sus diversos componentes han superado su intento por décadas de funcionar como un solo departamento, lo que ha ocasionado que el conjunto sea más inconexo que cohesionado». Tiene razón, y el mismo argumento se ha expresado en otros lugares, incluida la revista liberal The New Republic.

La gran ventaja, desde el punto de vista de Cuccinelli, sería crear una agencia centrada exclusivamente en sus prioridades en materia de inmigración, sin distracciones. En cuanto al resto, Cuccinelli privatizaría la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), volviendo a una situación cercana al statu quo anterior al 11-S), transferiría la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras al Departamento de Transporte y enviaría a la Guardia Costera al Departamento de Justicia o de Defensa. En una decisión sensata, disolvería el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Creado originalmente para combatir la falsificación, pero más conocido hoy en día como el servicio de protección del presidente, las misiones del Servicio Secreto no están realmente alineadas y este ha sufrido una serie de fracasos vergonzosos y casi catastróficos, incluidos los dos intentos de asesinato contra Trump en 2024. Sin embargo, si el Congreso no aboliera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Cuccinelli consolidaría el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en una sola unidad del Departamento.

Con o sin reorganización, quiere más cargos de designación política y una mayor dependencia de responsables interinos mientras se confirman los nombramientos definitivos y, por supuesto, un fuerte aumento de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. «El próximo presidente debería solicitar un presupuesto realista que cubra íntegramente estos costes». Una gran redada de inmigrantes no puede funcionar con un presupuesto reducido.

Un efecto secundario peligroso del enfoque obsesivo en la inmigración es que se puede pasar por alto a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. El desempeño de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) durante la primera Administración Trump fue irregular, y los expertos en respuesta ante desastres lo achacaron a que el presidente veía el Departamento de Seguridad Nacional como si fuera, ante todo, una agencia de administración de fronteras. Cuccinelli apenas dedica espacio a FEMA en su capítulo y, en lo poco que incluye, se centra sobre todo en reducir el papel de la ayuda federal y trasladar la carga a los gobiernos estatales y locales. Es una mala idea en un momento en que el país afronta más desastres meteorológicos de gran magnitud, pero Trump ya la puso sobre la mesa en su primera semana de regreso al cargo.

El primer objetivo importante en materia de inmigración es garantizar que entren en el país muchas menos personas, tanto legal como ilegalmente. Cuccinelli imagina una autoridad similar a la del Título 42 que no se active por una emergencia de salud pública, sino por una declaración de «pérdida del control operativo de la frontera». Esto permitiría a Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo que, de otro modo, tendrían derecho legal a solicitarlo. También quiere elevar el estándar por el que un migrante puede alegar un temor creíble de ser perseguido en su país, y reducir significativamente los visados existentes para las víctimas de delitos que colaboran con las fuerzas del orden. Cuccinelli considera que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración está demasiado interesado en conceder permisos para entrar legalmente en el país —lo califica de «Agencia de Fronteras Abiertas»— y quiere frenarlo con un examen más minucioso de las solicitudes para detectar casos de inelegibilidad o fraude. Sin embargo, haría una excepción: quiere ampliar el «trámite preferente», por el que quien puede y quiere pagar más se salta la cola.

El Proyecto recomienda involucrar a otras oficinas federales para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional o a su sucesor encargado de la inmigración. El Departamento de Trabajo limitaría y luego eliminaría gradualmente la visa H-2A, que permite a cientos de miles de trabajadores agrícolas temporales entrar a los Estados

Unidos con visados temporales; también se eliminaría gradualmente otro visado temporal para trabajadores no agrícolas. La H-1B, un visado para trabajadores especializados que se utiliza a menudo en la industria tecnológica, también se restringiría.

Asimismo, el Departamento de Estado ayudaría a cerrar las vías de entrada legal a Estados Unidos. «En cierta medida, el Departamento de Estado y gran parte de su personal parecen considerar el sistema de inmigración estadounidense menos como una herramienta para fortalecer los Estados Unidos y más como un programa de bienestar social global», se queja Kiron K. Skinner. Quiere que el Departamento aplique de forma más estricta las tasas de visado a los ciudadanos extranjeros de países que obligan a los estadounidenses a pagar por estos, que suspenda todos los visados para los ciudadanos de países que no aceptan a los deportados y que reduzca los visados de estudio para las personas de países no aliados de los Estados Unidos. Al igual que Trump, que redujo drásticamente la admisión de refugiados en su primer mandato, cree que la Oficina de Refugiados del Estado «debe destinar sus recursos a los retos derivados de la situación actual de la inmigración hasta que se pueda contener la crisis», cerrando efectivamente cualquier vía de acceso a los refugiados.

A su vez, el Ejército ayudaría a prevenir la entrada ilegal de inmigrantes. Además de desplegar tropas para construir muros fronterizos y trabajar en los puertos de entrada, Cuccinelli escribe que la próxima Administración debería utilizar «personal militar en servicio activo y miembros de la Guardia Nacional para ayudar en las operaciones de detención a lo largo de la frontera, algo que aún no se ha realizado». La medida no se ha aplicado todavía porque se entiende que la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso del Ejército en la aplicación de leyes dentro del territorio estadounidense. Trump desplegó tropas en servicio activo en la frontera durante su primer mandato, pero estas no pudieron actuar debido a estas restricciones. No obstante, el Pentágono anunció en enero de 2025 sus planes de desplegar cinco mil soldados de combate en la frontera.

El cerebro de Project 2025, Russell Vought, ha argumentado en otros foros que cruzar la frontera es equiparable a una «invasión»,

lo que podría justificar legalmente el despliegue militar: «Aquí es donde debemos ser radicales a la hora de descartar o replantearnos los paradigmas legales que han limitado nuestra capacidad para volver a la Constitución original». En otras palabras, ignorar las leyes que resultan inconvenientes. Cuccinelli también quiere encontrar vías para que las agencias policiales locales hagan cumplir las leyes de inmigración, lo que generalmente no se les permite hacer por una sentencia del Tribunal Supremo de 2012.

Una cosa que la nueva Administración no puede hacer es reiniciar la separación familiar. Un acuerdo alcanzado en 2023 entre el Gobierno federal y la Unión Americana por las Libertades Civiles impide el uso de la separación familiar durante los próximos ocho años. En paralelo a sus intentos por sellar la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajaría para deportar al mayor número posible de personas que ya se encuentran en el país. Un primer paso sería eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), en virtud del cual el secretario de Seguridad Nacional concede el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos a personas procedentes de países que sufren guerras, desastres naturales y otras calamidades. Trump comenzó a implementar esta medida en febrero de 2025. Según la Brookings Institution, en diciembre de 2024 había alrededor de 850 000 personas que gozaban de este estatus en Estados Unidos. Las administraciones presidenciales también han recurrido a una figura llamada Parole («Permiso de Entrada Temporal»), que permite admitir a personas en Estados Unidos por «razones humanitarias urgentes o [suponer] un beneficio público significativo». Biden, por ejemplo, intentó utilizarlo para permitir que los cónyuges no ciudadanos de estadounidenses permanecieran en Estados Unidos. Cuccinelli quiere que el Congreso limite su uso.

Las últimas administraciones han dado prioridad al abordaje de los delitos más graves y han rechazado procesar todos los casos posibles, pero Cuccinelli aboga por destinar muchos más recursos a hacer cumplir las leyes. El Departamento de Justicia daría instrucciones a los fiscales federales para que se centraran en los delitos relacionados con la inmigración. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS) buscarían casos de ciudadanos naturalizados cuya ciudadanía pudiera ser revocada legalmente por

fraude. Todos los empleados del DHS con capacidad para hacer cumplir la ley serían enviados desde las oficinas al terreno.

Varios cambios en el procedimiento darían lugar a que muchos más inmigrantes fueran detenidos, mantenidos en prisión o deportados sumariamente. La «expulsión acelerada» permite a los funcionarios de inmigración expulsar a algunas personas sin audiencia previa, si bien ahora solo se utiliza en un radio de 160 kilómetros de la frontera, una directriz que Cuccinelli revocaría. Esto crearía el riesgo de que residentes legales, e incluso ciudadanos, fueran deportados sin el debido proceso para impugnar su expulsión. También bloquearía el uso del cierre administrativo, un proceso que elimina las audiencias de inmigración del calendario judicial de forma indefinida y a menudo permanente. Las directrices actuales también impiden a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a personas en lugares sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias o reuniones como funerales, pero Cuccinelli eliminaría estas restricciones. La segunda Administración Trump emitió una orden para ampliar la expulsión acelerada y revocar la directriz sobre lugares sensibles nada más asumir el cargo.

Antes de que Trump ganara sus segundas elecciones, a muchos inmigrantes detenidos en Estados Unidos se les concedía la libertad bajo fianza y se les liberaba en el país, ya que el Gobierno contaba con un espacio de detención limitado y un enorme retraso en los procedimientos. En Project 2025, Cuccinelli apuesta por limitar el uso de la fianza y pediría al Congreso que financiara enormes instalaciones de detención y más funcionarios de deportación para ocuparse de las personas que se encuentran bajo custodia[12].

Incluso sin deportar realmente a las personas, el Gobierno federal podría tomar una serie de medidas para hacer que Estados Unidos sea menos acogedor para los inmigrantes ilegales. El Gobierno mantiene un sistema llamado E-Verify para comprobar si los trabajadores están legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos. Es opcional para las empresas privadas, no así para los contratistas del Gobierno, según la ley federal. Cuccinelli quiere que el Congreso lo declare obligatorio, lo que dificultaría que los inmigrantes ilegales encontraran trabajo.

Aunque los conservadores han favorecido tradicionalmente el control local sobre la legislación de muchas materias, el Proyecto propone un mayor poder federal sobre los gobiernos estatales y locales. Muchas agencias policiales se han negado a cooperar con el ICE debido a la presión de los electores, las preocupaciones por los abusos y los costes, pero Gene Hamilton recomienda condicionar siete mil millones de dólares en subvenciones del Departamento de Justicia a las agencias locales supeditadas a su cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional. Cuccinelli condicionaría parte de la financiación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a la inmigración. Pediría al Departamento de Educación que suspendiera todo acceso a préstamos federales en los estados donde los inmigrantes no autorizados tienen derecho a matrícula estatal en las universidades públicas. En conjunto, estas medidas podrían producir una fuerte caída en el número de inmigrantes no autorizados en el país, pero Cuccinelli no estima cuántos. Trump ha prometido deportar a veinte millones de personas que se encuentran en el país de forma ilegal, pero eso es probablemente imposible: los estudios más fiables sugieren que no hay veinte millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.[13]

Durante el primer mandato de Trump, las objeciones a su política migratoria no fueron de carácter procedimental, sino moral. Además de separar familias, Trump se centró en los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas vulnerables. Como describió Adam Serwer, de The Atlantic, estas medidas «tienen como objetivo la crueldad».

En el segundo mandato, muchas de las objeciones morales siguen vigentes, pero las ideas que Trump propuso durante la campaña electoral y las de Project 2025 plantean la posibilidad de que se vea obligado a elegir entre sus políticas migratorias y la estabilidad económica. Ha prometido reducir la inflación, pero una deportación masiva podría perjudicar a los sectores de la economía estadounidense que dependen de los inmigrantes, como la agricultura y la construcción, lo que provocaría un aumento de los costes. Oren Cass, un pensador político que contribuyó a la redacción del manual, ha argumentado que la necesidad de mano de obra migrante es exagerada, aun así, el efecto a corto plazo de la

deportación masiva sería un perjuicio económico. Un buen ejemplo es Springfield, Ohio, la ciudad cuya población haitiana Trump difamó sin fundamento durante la campaña de 2024. Como señalaron muchos líderes y residentes de Springfield, la llegada de haitianos revitalizó la suerte de una ciudad industrial en decadencia. Expulsarlos revertiría esa situación.

La deportación masiva es una medida prácticamente inédita en la historia de Estados Unidos, y el único ejemplo destacado de esta es una advertencia. En 1954, la Administración Eisenhower emprendió una gran redada de migrantes mexicanos en la frontera, deteniendo a más de un millón de personas, según fuentes gubernamentales. El programa fue una pesadilla: ciudadanos estadounidenses fueron arrastrados en las redadas, se deportó a muchas personas en condiciones inhumanas y muchas otras murieron. Por si fuera poco, a la deportación se le dio un nombre racista: «Operación Wet back» (Operación 'Espaldas mojadas'). Fue además un fracaso político. Los cruces ilegales de la frontera disminuyeron, pero principalmente porque, en respuesta a la demanda de los empleadores, el Gobierno creó una vía para que los trabajadores entraran legalmente.

Capítulo 3

Economía y comercio

Las mayores divisiones dentro de la derecha estadounidense hoy en día se centran en cómo gestionar la economía, o incluso a si hay que gestionarla en absoluto. Durante décadas, los conservadores han favorecido una política económica del laissez-faire: impuestos bajos, poca regulación, un Gobierno reducido y libre comercio. Esto formaba parte del ADN fundacional de la propia Heritage Foundation. El presidente Ronald Reagan defendió la «economía de la oferta», que sostenía que ayudar a las grandes empresas y a las personas con altos ingresos mejoraría el conjunto de la economía; sus detractores la tildaron de «economía del goteo», criticando así que a la mayoría de la gente le llegaba muy poco.

Donald Trump ha cuestionado algunas de estas opiniones heredadas como parte de su enfoque más populista de la política. Se ha opuesto durante mucho tiempo al libre comercio y ha abogado por un mayor proteccionismo. Como presidente, impuso aranceles y, como candidato en 2024, prometió más y mayores. También se ha opuesto a las reducciones de la Seguridad Social y Medicare, tradicionalmente objetivos de los recortes presupuestarios conservadores, y presidió un enorme aumento del déficit. Al menos retóricamente, Trump ha adoptado una postura más favorable hacia los trabajadores manuales y los sindicatos.

La tensión entre estas dos escuelas es evidente en el abordaje de las cuestiones económicas de Project 2025: existe un debate sobre estas cuestiones básicas dentro del propio documento, lo que revela las fisuras de la coalición de Trump como en ningún otro lugar del manual. Aunque la Heritage Foundation se jacta de que sus empleados «siempre defienden públicamente una posición única y unificada» sobre cualquier cuestión, aquí hacen varias excepciones. Los editores incluyen ensayos con enfoques opuestos que defienden, por una parte, el proteccionismo (del asesor de Trump, Peter

Navarro) y el libre comercio (del director de un think tank sobre el libre mercado), y otro par que defiende y se opone al Banco de Exportación e Importación, una agencia que fomenta las exportaciones estadounidenses. Un capítulo sobre el Departamento de Trabajo incluye cuidadosamente opiniones discrepantes de sus conclusiones sobre algunos temas controvertidos.

Estas disputas sobrepasan el debate académico. Trump ganó las elecciones de 2024, en gran parte, gracias a sus promesas en materia de economía. Prometió frenar la inflación, impulsar el empleo ciudadano deportando a los inmigrantes e imponer aranceles elevados. El Proyecto analiza estas cuestiones en profundidad, pero no llega a conclusiones claras sobre ninguna de ellas. Otra área importante de desacuerdo dentro del mundo de Trump es cómo tratar con las grandes empresas tecnológicas. Tras años de duras críticas por parte de la nueva derecha, estas compañías han tomado recientemente medidas para acercarse al propio Trump. Project 2025 apoya en general una línea dura contra las grandes empresas tecnológicas, mientras que fomenta una regulación más flexible de las criptomonedas.

Por otra parte, los autores abogan por una distensión (aunque no una alianza) con los sindicatos, recortes en los programas contra la pobreza, fuertes reducciones en los impuestos sobre la renta de las empresas y las personas físicas, y una menor regulación financiera, lo que podría incluir el fin de la Reserva Federal. Es revelador que, a pesar de que la inflación fue una cuestión tan crucial para la presidencia de Biden, el documento ofrece pocas respuestas concretas sobre cómo un presidente conservador debería reducirla realmente. También llama la atención la ausencia de un respaldo a la afirmación de Trump de que la inmigración es un grave problema para los trabajadores estadounidenses. En conjunto, estos capítulos sugieren que el populismo de la derecha MAGA no es tan superficial como sostienen algunos críticos liberales, pero tampoco es tan serio ni tan concreto como afirman sus defensores.

Fiscalidad y gastos

Las economías hacen y deshacen a los presidentes, aunque estos tengan poco control directo sobre ellas. Sin embargo, las herramientas más sencillas con las que cuenta cualquier Administración son el gasto y los impuestos. «El presupuesto debe equilibrarse reduciendo el gasto federal, manteniendo al mismo tiempo una defensa nacional sólida y sin aumentar los impuestos», escriben los autores de un capítulo sobre el Tesoro. Esto es imposible sin enormes recortes en el gasto federal, pero el Proyecto no especifica ningún recorte importante, especialmente en categorías tan importantes como la Seguridad Social y Medicare. Es imposible evaluar las implicaciones presupuestarias del Proyecto en su conjunto, ya que pocas secciones cuantifican en dólares sus ideas. Como señalo en otra parte de este libro, los autores de diversas secciones abogan por grandes aumentos del gasto para sus propios departamentos; solo unos pocos sugieren recortes.

Quizá los autores han visto fracasar estrepitosamente suficientes intentos conservadores para debilitar los derechos sociales —incluido el intento de George W. Bush de privatizar parcialmente la Seguridad Social y la propuesta del expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan de recortar Medicare— por lo que parecen reticentes a sugerir recortes, sin tomar en cuenta las promesas de Trump de proteger ambos programas. Los autores señalan estos programas como «los principales impulsores de nuestra deuda nacional de 31 billones de dólares» y añaden que, «en esencia, nuestro problema de déficit es un problema de Medicare y Medicaid». Sin embargo, más que un cambio integral, sugieren recortes graduales. Como indiqué en la primera sección, una estimación prevé que las propuestas de campaña de Trump añadirían otros 7,75 billones de dólares al déficit.

No obstante, los autores sugieren grandes cambios en la fiscalidad estadounidense. Simplificarían el sistema del impuesto sobre la renta de siete tramos a dos y eliminarían la mayor parte de deducciones y otras excepciones; gravarían las ganancias de capital y los dividendos al 15%; y reducirían el impuesto de sociedades del 21 al 18%. Aunque el impacto en cada contribuyente individual variaría, el efecto más claro sería una gran reducción de impuestos

para los ricos y las empresas con altos ingresos.

Con todo, esto es solo un primer paso. A largo plazo, proponen pasar a un impuesto sobre el consumo, también conocido como impuesto fijo. Esta tasa, que durante mucho tiempo ha sido el objetivo de algunos conservadores, cambia el enfoque de lo que gana una persona a lo que gasta, gravando lo que consume. «Un impuesto sobre el consumo minimizaría la distorsión de las decisiones económicas privadas por parte del Gobierno y, por lo tanto, sería la forma menos perjudicial desde el punto de vista económico de aumentar los ingresos fiscales federales», escriben. Los economistas han esbozado varios tipos de impuestos sobre el consumo, y los autores de Project 2025 no se comprometen con ningún modelo, si bien el más fácil de entender sería un impuesto nacional sobre las ventas sin exenciones o con pocas exenciones.

Un impuesto sobre el consumo puro promete simplicidad y elimina el complejo sistema de deducciones y tramos del código fiscal actual. No obstante, sería mucho más regresivo. Para las personas con altos ingresos, un impuesto sobre el consumo es más atractivo que el sistema actual, que genera impuestos más elevados para quienes ganan más dinero, independientemente de lo que gasten. Sin embargo, para las personas con ingresos más bajos, este impuesto sería más costoso que el sistema actual, ya que cuanto más pobre es una persona, mayor es la proporción de sus ingresos que tiene que gastar en necesidades básicas.

Comercio

Trump cree que la política comercial puede ser tan eficaz como los impuestos y el gasto público a la hora de influir en la economía. Ha reavivado el apoyo a los aranceles entre la derecha, pero, aunque muchas otras facciones del movimiento conservador han abrazado o se han rendido al trumpismo, los defensores tradicionales del libre mercado siguen mostrándose abiertamente escépticos con respecto a las ideas de Trump.

Muchas de las afirmaciones de Trump sobre el comercio no tienen sentido. Los aranceles son un impuesto adicional sobre los productos importados, lo que significa que no los paga el país productor, sino el consumidor, es decir, en este caso, los estadounidenses. Los comerciantes pueden asumir el coste o repercutirlo a los consumidores, lo que a su vez podría desalentar la compra de productos importados. Sin embargo, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que los países extranjeros pagan los aranceles impuestos por Estados Unidos. Esto no es cierto, independientemente de cualquier otro beneficio que pueda reportar la imposición de aranceles. No obstante, el proteccionismo puede ser eficaz desde el punto de vista político. Un estudio académico de 2024 reveló que, a pesar de que el interior de Estados Unidos había soportado el mayor peso económico de la guerra comercial, se había vuelto más propenso a asociarse con Trump y el Partido Republicano.

El único colaborador de Project 2025 dispuesto a defender los aranceles es Peter Navarro. Economista con opiniones políticas heterodoxas, lleva mucho tiempo obsesionado con los déficits comerciales, por ejemplo, con el hecho de que Estados Unidos importe más productos de China de los que exporta a ese país. Este discurso lo introdujo en la órbita de Trump, ya que daba cierto respaldo intelectual a los reflejos proteccionistas del presidente. Una vez en la Casa Blanca, Navarro no se limitó a la economía. Se enfrentó públicamente a los médicos que lideraban la respuesta gubernamental a la COVID-19 y afirmó sin pruebas que el fármaco hidroxicloroquina era un remedio para la enfermedad. Más tarde, se involucró en los intentos de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020 y pasó cuatro meses en prisión por negarse a cooperar con los investigadores del Congreso.

El argumento de Navarro a favor de los aranceles es en realidad un argumento en contra de China. En lugar de afirmar que estos son deseables per se, defiende que el proteccionismo de otros países exige una respuesta recíproca. Navarro sostiene que las supuestas normas de libre comercio han perjudicado a Estados Unidos. En virtud de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, otros países pueden aplicar aranceles a los productos estadounidenses siempre que apliquen esos mismos aranceles a los

productos de otros países. «El resultado práctico ha sido la explotación sistemática de los agricultores, ganaderos, fabricantes y trabajadores estadounidenses», escribe. Navarro quiere que los aranceles sobre todos los productos chinos sean lo suficientemente altos como para disuadir a los estadounidenses de comprar cualquier producto fabricado por el gigante asiático. También utilizaría incentivos financieros para atraer a las empresas estadounidenses a que trasladen sus fábricas deslocalizadas de China a Estados Unidos.

Un gran defecto de este argumento es que Trump ya intentó una guerra comercial con China durante su primer mandato, y no logró reducir el déficit comercial. Los defensores del libre comercio que contribuyeron al Proyecto observan otros problemas. Veronique de Rugy, economista, rechaza con vehemencia la idea de que los déficits comerciales sean algo negativo. «Como saben los economistas especializados en comercio, las exportaciones suponen un coste para la economía: restan valor al PIB. Las importaciones, por el contrario, lo aumentan», escribe. «Si Estados Unidos pudiera adquirir todas las importaciones que recibe actualmente sin exportar nada a cambio, tendría todas las ventajas».

Kent Lassman, que dirige el Instituto de Empresas Competitivas (Competitive Enterprise Institute), de tendencia liberal, critica directamente el discurso económico de Trump y sostiene que la globalización ha ayudado a los estadounidenses en su conjunto. «Los datos no muestran una masacre económica estadounidense», escribe, adaptando una frase memorable del primer discurso inaugural de Trump. «Muestran más de dos siglos de crecimiento intensivo». Analiza la historia reciente y argumenta que Navarro quiere redoblar el fracaso. «Llevamos cinco años inmersos en el mayor experimento con aranceles desde la Gran Depresión, y los resultados están a la vista: los nuevos aranceles elevan los precios al consumidor para los estadounidenses de a pie en unos 1200 dólares por hogar al año y solo benefician a un pequeño número de intereses».

Lassman sostiene que Estados Unidos debe tener una estrategia flexible y cambiante para contrarrestar económicamente a China, y le preocupa que una desconexión total de Beijing haga que China

sea menos predecible y más peligrosa. Con todo, reconoce que «esto es más difícil de vender políticamente que las jeremiadas ruidosas y simplistas».

Big Tech

Project 2025 se muestra abiertamente hostil con las grandes empresas tecnológicas. El sector se ha convertido en una parte dominante de la economía estadounidense, pero los conservadores lo han atacado por trabajar en y con China; por eliminar contenidos políticos considerados ofensivos o falsos, incluidas muchas de las afirmaciones más incendiarias de Trump; y por su alineamiento político, en general, progresista. Los republicanos del Congreso han acusado a las tecnológicas de «censura», especialmente después de que Twitter y Facebook limitaran la difusión de una noticia de 2020 sobre el ordenador portátil de Hunter Biden por temor a que se tratara de desinformación (no lo era).

Más recientemente, han surgido indicios de un acercamiento entre Silicon Valley y Mar-a-Lago. Elon Musk compró Twitter, lo renombró X y lo convirtió en un pantano de teorías conspirativas de la extrema derecha y de racismo; también se convirtió en un importante patrocinador financiero de la campaña de Trump para 2024. Durante su primera administración, Trump prometió prohibir TikTok por ser propiedad china, pero tras reunirse con Jeff Yass, inversor de la empresa matriz de TikTok y donante del Partido Republicano, en 2024, comenzó a defender la aplicación. Otros altos directivos de empresas tecnológicas han comenzado a seguir su ejemplo, renegando de sus compromisos progresistas y apoyando a Trump. Jeff Bezos, de Amazon, impidió que The Washington Post, de su propiedad, respaldara a Kamala Harris para la presidencia, y una serie de ejecutivos, entre ellos Tim Cook, de Apple, y Mark Zuckerberg, de Meta, hicieron donaciones y asistieron a la toma de posesión del presidente en enero de 2025. Pero el Proyecto precede a esta reconciliación.

Un punto fundamental del documento es la defensa de que TikTok

supone un peligro para la seguridad nacional estadounidense y debería prohibirse, al igual que otras aplicaciones, como la red social WeChat. Los autores tienen en mente medidas menos drásticas para las plataformas estadounidenses, pero siguen exigiendo una regulación más estricta. Brendan Carr, el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), quiere que la agencia dificulte que los niños eludan los límites de edad en las plataformas de redes sociales y que los proveedores de tecnología contribuyan al mismo fondo común que las empresas de telecomunicaciones para proveer conexión de banda ancha en zonas rurales. Sin embargo, la mayor parte de la atención se centra en lo que Carr denomina «intentos de expulsar puntos de vista políticos diversos de la plaza pública digital».

Carr sugiere, por ejemplo, que la FCC exija a empresas como Meta que sean más específicas en sus condiciones de servicio y que «estén obligadas a rendir cuentas» si prohíben publicaciones que no estén contempladas en ellas. La mayor baza de la FCC es la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que establece que las plataformas en línea no se consideran editoras responsables de todo el contenido publicado. Por ejemplo, un periódico podría ser demandado si su columnista comete difamación, pero Instagram no es responsable si un particular difama a alguien en su cuenta personal. La sección 230 también establece que estas plataformas no pueden ser consideradas responsables por restringir de buena fe el acceso a material que consideran ofensivo, incluso si está protegido por la Constitución. Carr quiere que la FCC interprete la ley de forma más restrictiva y que colabore con el Congreso para modificarla, lo que en la práctica supondría decir a las empresas tecnológicas que, si van a eliminar contenidos, deben empezar a asumir la responsabilidad de estos, al igual que los editores.

Este tipo de argumento, junto con las acusaciones de censura lanzadas contra las empresas tecnológicas, se ha asumido tan deprisa que es fácil pasar por alto su radicalidad. Tratamos a plataformas como X como plazas públicas comunes, pero no lo son: son empresas de propiedad privada. Es evidente por qué es peligroso que las empresas controlen tanto el discurso, pero no es obvio cuál es la mejor manera de resolver ese problema. La Primera

Enmienda de la Constitución prohíbe al Gobierno restringir la libertad de expresión, si bien algunos de los argumentos del Proyecto entran en una zona peligrosa en la que el Gobierno obliga a las empresas privadas a posicionarse, todo en nombre de la libertad de expresión. Dicho de otro modo, intenta detener la censura privada convirtiendo al Gobierno en censor.

Puede que esto suene alarmista, pero ¿de qué otra forma podríamos interpretar la sugerencia de Carr de «ofrecer soluciones políticas para abordar la censura de la libertad de expresión por parte de las grandes tecnológicas»? Y él no está solo en esta postura. En un pasaje inquietante, el profesor de Derecho y exfuncionario del Departamento de Justicia de Trump, Adam Candeub, abre la puerta a castigar las posturas políticas de las grandes empresas, simplemente porque el país está políticamente polarizado.

«Cuando los bancos o las plataformas de Internet rechazan a clientes por sus opiniones políticas o sociales (a diferencia de sus opiniones religiosas), renuncian a obtener beneficios. Aunque estas decisiones suelen justificarse con políticas de relaciones públicas, marketing o imagen de marca —y normalmente estas medidas, que reflejan el criterio empresarial, deberían recibir y reciben deferencia —, esta presunción es más difícil de aceptar en una América altamente partidista e ideológicamente dividida», escribe Candeub. Afirma que la Comisión Federal de Comercio podría acusar a estas empresas de prácticas comerciales desleales, lo que significaría decirles con quién pueden hacer negocios.

Es posible que la Administración Trump ni siquiera necesite tomar medidas tan draconianas para lograr la cooperación. El uso de amenazas, ya sea por parte de Trump en la campaña electoral, en su red social Truth Social o en foros como Project 2025, ha contribuido a que las empresas de redes sociales dejen de controlar la desinformación y la información falsa y, en general, de involucrarse en la política. Meta ya ha eliminado la verificación de datos y ha relajado las restricciones en torno al discurso de odio en plataformas como Facebook e Instagram, y Zuckerberg ha citado «las recientes elecciones» como motivo para hacerlo. Esto significa que los usuarios habituales de las plataformas de redes sociales pueden esperar un entorno informativo peor, con más material falso

y engañoso y un lenguaje más grosero y abusivo. Meta es una empresa privada, pero está actuando en respuesta a las amenazas del nuevo Gobierno, y no a una demanda generalizada de los usuarios. La censura más eficaz es el miedo.

Las criptomonedas se han convertido en una causa popular de la derecha, pero el sector se ha visto frenado por la falta de claridad sobre cómo se puede y se debe regular, en particular, si se trata de una mercancía (un producto con el que se negocia, como el oro o el tocino) o un valor (como una acción o un bono). La respuesta afecta a las leyes que se aplican y a quién las hace cumplir. David R. Burton se queja de que los reguladores «han sido actores irresponsables en el ámbito de los activos digitales» al no promulgar normas claras, y sugiere que activos como el Bitcoin se traten como mercancías. Esto coincide con la preferencia de muchas personas en el ámbito de las criptomonedas, ya que la legislación sobre valores es más estricta.

Regulación financiera

En contraste, en otros ámbitos el objetivo es reducir las regulaciones siempre que sea posible. «La legislación bancaria estadounidense sigue estancada en la década de los 30», escriben los autores. «Las leyes sobre valores son ahora extremadamente complejas y no constituyen un régimen regulatorio coherente y racional».

El Proyecto fusionaría varias oficinas reguladoras, incluida la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que garantiza la mayoría de las cuentas de ahorro y corrientes de los ciudadanos, en una sola. Restringiría la Red de Control de Delitos Financieros, diseñada para combatir el blanqueo de capitales, pero que algunos conservadores consideran invasiva. Sin embargo, los principales objetivos son las leyes aprobadas tras la crisis económica de 2008 que aumentaron la supervisión gubernamental y las restricciones a las empresas financieras.

En concreto, los autores quieren que el Congreso derogue las secciones de la Ley Dodd-Frank que amplían el número de empresas sujetas a la supervisión de los reguladores, lo que permite al Gobierno evaluar el riesgo financiero sistémico. En el documento también exigen la divulgación de la relación entre la remuneración del director ejecutivo y el salario medio de los empleados. Finalmente, crean un método para que el Gobierno liquide rápidamente una entidad financiera en quiebra. Los autores quieren asimismo eliminar las disposiciones que exigen la divulgación de información sobre los minerales conflictivos[14] y la seguridad en las minas.

Al igual que muchos en la derecha, los autores detestan especialmente la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, otra creación de Dodd-Frank que tiene como objetivo defender a los consumidores contra las prácticas abusivas en los préstamos con tarjeta de crédito, los estudiantiles y los préstamos a corto plazo, entre otras áreas. La califican de inconstitucional, «una agencia federal altamente politizada, perjudicial y totalmente irresponsable», y «un mecanismo de extorsión para proporcionar financiación irresponsable a organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas alineadas políticamente con quienes impulsaron su creación». Las repetidas demandas que cuestionan la constitucionalidad de la Oficina la han debilitado, pero la ley que la autoriza ha sobrevivido en última instancia.

En conjunto, estas medidas darían más libertad a las empresas para actuar y, tal vez, obtener beneficios, pero expondrían a los particulares a prácticas engañosas, como los préstamos usureros, disminuirían la transparencia del sistema financiero del país y crearían el riesgo de que se repitiera la crisis de 2008. Se hacen eco de la misma desregulación que Phil Gramm, antiguo mentor de Russell Vought, exigió en la década de los 90, lo que contribuyó a crear las condiciones para la Gran Recesión.

Project 2025 defiende que los reguladores deben actuar para frenar la inversión conocida como ESG (es decir, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza), un movimiento relativamente reciente que busca alejar a las empresas de prácticas y líneas de negocio que algunos inversores consideran dañinas, entre ellas el uso de los combustibles

fósiles. Resulta difícil exagerar —o incluso creer— el nivel de pánico que despierta la ESG en las partes de Project 2025 centradas en la economía. Candeub se lamenta de que «estamos presenciando en los mercados actuales el uso del poder económico… para socavar las instituciones democráticas y la sociedad civil». Se trata de un cambio radical con respecto a la tradicional postura conservadora de dejar que los inversores y las empresas actúen como deseen, y entra en conflicto con el enfoque desregulador adoptado en otras partes de Project 2025. La razón por la que la derecha se siente tan amenazada por los criterios ESG es que estos rechazan la regulación gubernamental en favor de la acción privada en el mercado y, por lo tanto, pone en práctica métodos históricamente conservadores contra los aliados de la derecha. La derecha, a su vez, responde adoptando la regulación gubernamental, tradicionalmente de izquierdas, para combatirlos. Si tienen éxito, estas propuestas podrían suprimir la capacidad de los ciudadanos de a pie para invertir según su conciencia e intimidar a las empresas para que no adopten cambios más responsables con el medio ambiente, impidiendo esfuerzos para frenar el cambio climático.

La Reserva Federal

Los autores del manual también reducirían el poder de la Reserva Federal de varias maneras importantes. Actualmente, el banco central tiene el doble mandato de mantener la estabilidad de los precios y fomentar el empleo. Los autores creen que el enfoque en el empleo significa que la «Fed» está dispuesta a tolerar la inflación. Los últimos años, que han registrado una alta inflación pero también bajas tasas de desempleo, ilustran esta línea de trabajo. La «Fed» también ha comprado billones en activos tras la crisis de 2008, y en el Proyecto se exige que el banco los venda. Les preocupa que actuar como prestamista de última instancia lleve a las entidades financieras a adoptar comportamientos de riesgo.

Por otra parte, en términos más generales, se oponen a la actividad central de la Reserva Federal, que consiste en fijar los tipos de interés y supervisar la oferta monetaria.[15] «Un problema

fundamental del control gubernamental de la política monetaria es su exposición a dos presiones políticas inevitables: la presión para imprimir dinero con el fin de subvencionar los déficits públicos y con el fin de impulsar artificialmente la economía hasta las próximas elecciones», escribe Paul Winfree. «Dado que ambas presiones siempre existirán con políticos interesados, la única solución permanente es tomar el volante monetario fuera del control de la Reserva Federal y devolverlo al pueblo».

Aquí, Project 2025 comete el mismo error lógico que vimos en la primera sección: si es cierto que la Reserva Federal está demasiado sujeta a la manipulación política, es difícil entender por qué exponerla a una interferencia política más directa (y centrada en el corto plazo) sería mejor. Incluso si se creara una supervisión más directa por parte de los funcionarios electos, se invitaría a la demagogia.

Sin embargo, a largo plazo, los autores desearían que la Reserva Federal dejara de existir por completo. Abogan por una moneda respaldada por materias primas —en efecto, un retorno al patrón oro, en el que cada dólar representa una cantidad fija de oro— o por la «banca libre», el sistema que utilizaba Estados Unidos en el siglo XIX, en el que se permite a los bancos individuales emitir su propia moneda. En realidad, los economistas conservadores llevan tiempo defendiendo estas dos alternativas. Cualquiera de ellas podría ser increíblemente desestabilizadora, con efectos impredecibles en todo, desde los precios inmediatos hasta la economía mundial. La mayoría de los países tratan el dólar actual como moneda de reserva, y cambiar su emisor o su valor podría hacer que otros países lo abandonaran o se replantearan su valor. El patrón oro puede prevenir la inflación, pero conlleva el riesgo de deflación, lo que puede hundir una economía. Estados Unidos abandonó estos sistemas por muchas razones, entre ellas las frecuentes crisis bancarias que se derivaban de ellos y en las que la gente perdía grandes sumas de dinero. La buena noticia es que ninguna de estas ideas tiene muchas posibilidades de ser aprobada en un futuro próximo.

Trabajo

La cercanía del Partido Republicano con las empresas suele ir acompañada de hostilidad hacia los sindicatos y, en el mejor de los casos, indiferencia hacia los trabajadores en general. Sin embargo, Trump ha logrado captar a una parte de los trabajadores manuales que antes votaban a los demócratas mediante una combinación de proteccionismo, retórica prolaboral y apelaciones a prejuicios. En la práctica, su primera Administración y, en especial, su Junta Nacional de Relaciones Laborales se mostraron tan escépticos con respecto a la protección de los trabajadores como cualquier otro presidente republicano reciente. Algunos de sus aliados, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance y el senador Josh Hawley, han buscado una combinación de una apertura hacia los trabajadores con ideas socialmente conservadoras. Esta fusión es el tema central del capítulo de Jonathan Berry sobre el Departamento de Trabajo.

«El bienestar de la familia estadounidense es el núcleo de las recomendaciones conservadoras en materia de política laboral», escribe, haciéndose eco del énfasis en los roles familiares tradicionales que se observa en el primer capítulo, y sitúa como objetivo destacado «el restablecimiento del empleo que sustenta a la familia como eje central de la economía estadounidense». En otras palabras, quiere volver a un mundo en el que el hombre sea el sostén económico de la unidad familiar y la madre cuide del hogar.

Berry intenta lograr un delicado equilibrio entre el empoderamiento de los trabajadores y la garantía de que reciban un buen salario sin respaldar a los sindicatos, que históricamente han sido la forma más eficaz de alcanzar esos objetivos. «Sería un error antagonizar los intereses fundamentales de los sindicatos», escribe, si bien adoptaría medidas para socavarlos.

Por un lado, Berry afirma que el Gobierno federal debería proteger el derecho de los trabajadores a sindicarse sin interferencias por parte de los empleadores y readmitir rápidamente a aquellos empleados despedidos por organizarse. Por otro lado, interpretaría de forma más restrictiva lo que constituye una actividad sindical,

exigiría votaciones formales para sindicarse en lugar de la recogida de tarjetas sindicales firmadas y pediría al Congreso que concediera a las empresas exenciones de las principales leyes laborales federales en ciertos casos. Berry argumentaba, asimismo, que debería despedirse al consejero general de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, es decir el director de facto de la agencia), nombrado por Biden y muy favorable a los sindicatos, lo que Trump hizo rápidamente. También defendía impulsar la investigación de malversaciones sindicales, incluso sin denuncia formal previa, y fomentaba alternativas a los sindicatos, como los comités de empresa, en los que los empleadores y los trabajadores se reúnen para debatir cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo.

Berry flexibilizaría las normas sobre el pago de horas extras y revocaría las normas de Biden que clasifican a los trabajadores temporales como empleados, lo que les otorga ciertas protecciones y beneficios, como bajas por enfermedad y un salario mínimo. Haciéndose eco de empresas como Uber, Berry sostiene que tratarlos como contratistas les otorga más flexibilidad, pero también significa que las empresas asumen una mayor responsabilidad hacia ellos. En esta misma línea, exige reglas menos estrictas para la concesión de licencias profesionales en sectores como la cosmética, una idea que cuenta con cierto respaldo bipartidista.

A pesar de su retórica sobre el fortalecimiento de la familia, Berry flexibilizaría las leyes sobre trabajo infantil para facilitar que los menores de edad trabajen en empleos peligrosos, especialmente en el sector agrario. «Algunos jóvenes muestran interés por trabajos intrínsecamente peligrosos. Las normas actuales prohíben a muchos de ellos, incluso si su familia dirige el negocio, trabajar en esos empleos», escribe. «El Departamento de Trabajo debería modificar sus normas sobre riesgos laborales para permitir que los adolescentes accedan a trabajos regulados con la formación adecuada y el consentimiento de los padres».

Red de Seguridad Social

¿Qué pasa con aquellos estadounidenses que no pueden encontrar o mantener un trabajo que les permita mantener a su familia? Project 2025 mantiene la histórica oposición conservadora a la mayoría de los programas contra la pobreza. Los autores quieren que el Gobierno haga menos por ayudar a los pobres y se centre en un crecimiento económico más amplio, con la esperanza de que otras organizaciones, como los grupos confesionales, tomen el relevo.

Es posible que se haya subestimado el papel central del Departamento de Agricultura (USDA) como importante proveedor de asistencia social, pues el Departamento supervisa programas cruciales como los cupones de alimentos, y la asistencia nutricional constituye el 70% de su presupuesto. Daren Bakst quiere que el USDA transfiera estos programas al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Una de las consecuencias de este traspaso sería la división de la ley agrícola, una importante legislación aprobada cada cierto tiempo que incluye tanto prestaciones, como cupones de alimentos y similares, como política agraria. Separar estas cuestiones relacionadas puede parecer sensato, pero la ventaja de unirlas es lograr un apoyo bipartidista. Separarlas probablemente debilitaría el apoyo republicano a los cupones de alimentos y otros programas de asistencia.

Y quizá de eso se trate, porque Bakst, en otros pasajes, busca maneras de recortar las políticas contra la pobreza. Restringiría el acceso a los cupones de alimentos y endurecería los requisitos de empleo para recibirlos. También recortaría los programas de comidas escolares, con el argumento de que deberían reservarse solo para los alumnos más necesitados. El USDA también es un gran proveedor de ayudas a los agricultores, mediante un entramado de subsidios y otros programas, que Bakst también recortaría de forma drástica. El exsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Ben Carson, se muestra escéptico con respecto a los programas de ayuda a la vivienda, argumentando que fomentan la pereza. «Las prestaciones públicas han conducido con demasiada frecuencia a trampas de pobreza intergeneracional, han penalizado implícitamente a las familias en matrimonios tradicionales con un padre y una madre y han desalentado el trabajo y el crecimiento de

los ingresos, restringiendo así la movilidad ascendente», escribe. Acotaría la duración de la elegibilidad para las prestaciones de vivienda y endurecería los requisitos laborales.

Carson también quiere que el HUD se centre más en que los estadounidenses adquieran viviendas unifamiliares en lugar de apartamentos. «Ser propietario de una vivienda constituye la columna vertebral del sueño americano», escribe. No obstante, Project 2025 también aboga por la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos empresas de financiación hipotecaria respaldadas por el Gobierno, lo que podría dificultar a algunos estadounidenses la obtención de préstamos hipotecarios.

Entre los países desarrollados, Estados Unidos ya tiene una de las redes de Seguridad Social más débiles, una de las tasas de pobreza más altas y una de las desigualdades más extremas. Estas propuestas abrirían más agujeros en la red de seguridad existente y, al menos a corto plazo, probablemente aumentarían la tasa de pobreza. A los estadounidenses les resultaría más difícil salir de la indigencia y recuperarse de un revés en la vida sin quedarse atrás de forma permanente. En resumen, el Gobierno ofrecería menos ayuda y sería más difícil obtenerla.

El censo

Una de las pocas funciones gubernamentales mencionadas en la Constitución es el censo decenal. Aunque el próximo recuento no se realizará hasta 2030, los autores del Proyecto desean convertir la Oficina del Censo en una organización mucho más politizada, empezando por garantizar que los nombramientos presidenciales tengan influencia. «Se necesita un liderazgo político para aumentar la eficiencia y alinear la misión de la Oficina del Censo con los principios conservadores», escribe Thomas F. Gilman.

¿Por qué debería el censo, un proyecto complejo y técnico que pretende ofrecer datos indiscutiblemente imparciales, alinearse con principios conservadores? La respuesta tiene que ver con la

financiación federal y con el reparto de escaños en el Congreso. «En 2020, la falta de participación de los conservadores fue uno de los factores que contribuyó a un recuento por debajo de las cifras reales en algunas zonas del país, lo que afectó a la representación de determinados estados», escribe Gilman. También quiere que la Oficina del Censo añada una pregunta sobre si los encuestados son ciudadanos estadounidenses. La representación en el Congreso se calcula en función de la población total, no de la población con ciudadanía, aunque algunos conservadores han intentado cambiar ese criterio, lo que trasladaría poder hacia estados con menos inmigrantes. Durante el primer mandato de Trump, la Oficina del Censo intentó añadir la pregunta de ciudadanía, pero el Tribunal Supremo acabó bloqueándola. Los jueces concluyeron que la Administración había mentido sobre sus motivos, no que la pregunta estuviera prohibida por sí misma. Antiguos directores de la Oficina del Censo han advertido de que preguntar por el estatus de ciudadanía desanimaría a los no ciudadanos a responder y haría el recuento menos preciso. Irónicamente, Gilman se queja en otro pasaje de que la Oficina del Censo hace «demasiadas preguntas» y de que son «excesivamente intrusivas».

Capítulo 4

Medioambiente y energía

El debate en el Proyecto sobre problemas ambientales y medios de producción de energía parece un informe de un mundo alternativo. En el mundo real, las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana están calentando la Tierra a un ritmo alarmante. El nivel del mar está subiendo a medida que se derrite el hielo polar. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, están azotando el planeta, incluido Estados Unidos: basta con preguntar a cualquiera que haya soportado los huracanes Harvey, María, Helene o Milton. Incluso estados del interior como Kentucky y Tennessee han sufrido inundaciones catastróficas. La red eléctrica, que durante mucho tiempo se ha dado por sentada, es cada vez menos fiable ante las altas temperaturas récord y las inusuales bajadas. Los cambios en los patrones climáticos provocan desplazamientos internos y ponen en peligro la agricultura; multitudes de refugiados procedentes de tierras que ya no son habitables se desplazan por todo el mundo, incluso a Estados Unidos.

Sin embargo, en el mundo de Project 2025, los progresistas están librando una «guerra injustificada contra los combustibles fósiles». Las fuentes de energía renovables son las culpables de cualquier problema relacionado con la fiabilidad de la red eléctrica. Los vehículos eléctricos son tolerables, más difícilmente deseables. La sequía, la escasez de agua y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos son una preocupación secundaria, si es que se tienen en cuenta. Estados Unidos tuvo problemas medioambientales reales en la década de los 70, pero eso ya es cosa del pasado.

Esta desconcertante brecha es clave para comprender las propuestas presentadas en el documento que nos ocupa. Básicamente, sus propuestas en este ámbito se reducen a dos puntos principales: el

primero es que Estados Unidos debe abandonar de forma rápida y decisiva prácticamente todos los esfuerzos federales para combatir el cambio climático. El segundo, que no es ajeno al primero, es que la principal preocupación de los responsables políticos federales debe ser hacer que los combustibles fósiles sean lo más baratos y abundantes posible.

No es de extrañar que un grupo de expertos conservadores se muestre escéptico ante el cambio climático y a favor de la explotación de combustibles fósiles; ha sido algo constante durante las últimas cuatro décadas. Aunque el republicano Richard Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 1970, los conservadores han tendido a descartar o restar importancia a lo que entonces se conocía como calentamiento global desde que se convirtió en una preocupación importante en la década de los 80. Las pruebas cada vez más evidentes no han cambiado su enfoque. La derecha ha colaborado con las compañías petroleras y carboníferas, así como con otras grandes empresas, para ralentizar o bloquear las regulaciones medioambientales. El primer administrador de la EPA de Donald Trump era un negacionista del cambio climático; cuando fue expulsado tras una serie de escándalos, fue sustituido por un lobista del carbón. Trump también nombró a lobistas para dirigir los departamentos del Interior y de Energía. Sin embargo, el baluarte conservador más fiable contra las medidas medioambientales ha sido el Poder Judicial, y en especial el Tribunal Supremo, que bloqueó en repetidas ocasiones la regulación del dióxido de carbono por parte de las administraciones de Obama y Biden.

El Proyecto llega tras un periodo en el que los estadounidenses se han visto incapaces de ignorar los efectos directos del cambio climático en sus propias vidas, incluso aquellos que siguen mostrándose escépticos sobre si está causado por la actividad humana. Hace una década, los negociadores internacionales reunidos en París alcanzaron un acuerdo histórico sobre el cambio climático, cuyo eje central eran los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos firmó el Acuerdo Climático de París. Como presidente, Donald Trump se retiró del pacto, pero cuando Joe Biden asumió el cargo, Estados Unidos se reincorporó.

Además, la Administración Biden aplicó las políticas más agresivas en materia de cambio climático en la historia de Estados Unidos. Utilizó dos grandes proyectos de ley de gasto, la Ley de Infraestructuras Bipartidista de 2021 y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, para intentar una revisión integral de la política climática estadounidense. La Ley de Infraestructuras añadió 550 000 millones de dólares en nuevos gastos, la mayoría de ellos relacionados de alguna manera con el clima, incluyendo subvenciones para estaciones de recarga de vehículos eléctricos, financiación del transporte público, modernización de la red eléctrica e investigación. La IRA añadió otros 800 000 millones de dólares para financiar proyectos de energía limpia, incentivar los vehículos eléctricos y reducir las emisiones de carbono, entre otros objetivos. Biden también abordó el cambio climático como un problema que afectaba a «todo el Gobierno», encargando a los funcionarios del gabinete que se prepararan para los cambios climáticos y los mitigaran. Sin embargo, también trabajó para reducir los precios de la gasolina y permitió que se llevaran a cabo nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles.

Es natural que cualquier presidente republicano intente revertir parte de esto, pero la magnitud del cambio que prevé Project 2025 sería radical, ya que retrasaría años o décadas el progreso de Estados Unidos hacia la energía sostenible y la reducción de emisiones. Muchas de las ideas que se presentan en este manual también tratan la sostenibilidad energética y alimentaria como algo claramente opuesto a los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Al no reconocer el vínculo inextricable entre ambos objetivos, abogan por medidas contraproducentes.

Cambio climático

Incluso sin los mandatos de Biden para todo el Gobierno, la gama de agencias involucradas en la política federal sobre clima y energía es amplia. Entre ellas, se encuentran organismos obvios como la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía,

pero también el Departamento de Agricultura, debido a que la política alimentaria y el cambio climático están estrechamente relacionados y a que el maíz es una fuente importante de etanol, un biocombustible; el Departamento de Transporte, que supervisa tanto las autopistas como el transporte público, y el Departamento del Interior, que gestiona la extracción de recursos en terrenos federales. Incluso el Departamento de Seguridad Nacional es un actor importante, ya que el problemático programa de seguros contra inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se ha visto desbordado por las condiciones meteorológicas extremas.

A diferencia de Trump, Project 2025 no se refiere abiertamente al cambio climático como un «engaño» y, en su mayor parte, evita declaraciones directas que cuestionen datos científicos específicos sobre el tema. Sin embargo, sus autores ignoran sistemáticamente las advertencias de la «industria alarmista del cambio climático», como la denomina despectivamente Thomas F. Gilman. Mandy Gunasekara, exjefa de gabinete de la EPA, pinta un panorama optimista en el que se han superado retos como el smog y el agujero de la capa de ozono, pero se siguen inventando nuevos villanos. «Aunque la historia medioambiental de Estados Unidos es muy positiva, se ha producido un retorno a la retórica basada en el miedo dentro de la agencia, especialmente en lo que se refiere a la amenaza percibida del cambio climático», escribe.

Los lectores del documento no encontrarán prácticamente ninguna referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero; la mención más directa es un plan para establecer un umbral alto de emisiones industriales anuales para la regulación de la EPA. Russell Vought presiona para que se incluyan «puntos de vista diversos» —un eufemismo apenas velado para referirse a los escépticos del cambio climático— y una mayor interferencia política en la redacción de la Evaluación Nacional del Clima, un informe gubernamental cuatrienal definitivo sobre el calentamiento global. Tampoco encontrarán ninguna referencia a las condiciones de sequía crónica que experimentan grandes extensiones de los Estados Unidos ni a las formas en que estas ponen en peligro el funcionamiento de los principales embalses occidentales, como el lago Mead. Los incendios forestales, un problema que empeora

constantemente, solo se mencionan de pasada. Tampoco se habla mucho del clima extremo o de los huracanes más intensos. Solo en un capítulo sobre el Departamento del Tesoro se aborda, con total indiferencia: «La historia demuestra que el crecimiento económico y el avance tecnológico y científico gracias al ingenio humano son, con mucho, las mejores formas de prevenir y mitigar los fenómenos meteorológicos extremos».

Gunasekara da a entender que, dado que el cambio climático es difícil de aislar o de influir en él, no vale la pena abordarlo mediante las herramientas de la EPA. «Las iniciativas normativas deberían centrarse en abordar problemas medioambientales con soluciones tangibles prácticas, rentables y asequibles para limpiar el aire, el agua y el suelo, y los resultados deberían medirse y supervisarse mediante métricas sencillas que estén a disposición del público», escribe.

Tras descartar los peligros del cambio climático, los autores llaman a atacar tanto a las instituciones científicas que lo documentan como a las políticas gubernamentales que lo combaten. Project 2025 propone cerrar la Oficina de Política Climática Nacional de la Casa Blanca, retirar todo el trabajo relacionado con el cambio climático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y suspender la financiación federal para la investigación de la captura de carbono.

En una de las ideas más impactantes de todo el Proyecto, Gilman pide la liquidación y privatización total de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), cuyas previsiones meteorológicas consultan cada día millones de estadounidenses, a veces para tomar decisiones de vida o muerte. Gilman se queja de que, debido a su enfoque en el clima, la organización se ha convertido en «perjudicial para la prosperidad futura de Estados Unidos».

«La NOAA se jacta hoy en día de ser un proveedor de servicios de información medioambiental, un proveedor de servicios de gestión medioambiental y un líder en investigación científica aplicada», escribe Gilman. «Cada una de estas funciones podría prestarse de forma comercial, probablemente a un coste menor y con mayor calidad».

No se trata de una idea totalmente novedosa. Aunque los servicios meteorológicos comerciales utilizan los datos de esta institución para realizar su trabajo, llevan mucho tiempo quejándose de que las previsiones gubernamentales de libre acceso les perjudican. AccuWeather ha abogado por que la NOAA deje de proporcionar datos al público y los facilite únicamente a empresas como la suya. Trump incluso propuso al director ejecutivo de AccuWeather para dirigirla en 2017, pero el Senado nunca lo confirmó, en parte debido a este conflicto de intereses.

Gilman no eliminaría el Centro Nacional de Huracanes, que rastrea y emite alertas sobre tormentas tropicales, pero sí afirma que debería revisarse para garantizar que los datos se presenten «sin ajustes destinados a apoyar a ninguna de las partes en el debate sobre el clima». Se muestra menos favorable hacia la Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica (OAR), que, según él, es «la fuente de gran parte del alarmismo climático de la NOAA». Quiere que se elimine la mayor parte de su búsqueda. Se convertiría, así, en solo una de las muchas víctimas si los autores del documento logran su objetivo de retirar la financiación a una serie de oficinas y entidades que se ocupan del cambio climático, como la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables y la Oficina de Demostración de Energías Limpias del Departamento de Energía.

Project 2025 exige la derogación total de la Ley de Infraestructuras Bipartidista y la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, pero, suponiendo que eso no ocurra, intentaría socavarlas en la medida de lo posible. Por ejemplo, los autores derogarían los programas de la IRA que financian la ciencia medioambiental, rescindirían la financiación ya asignada en virtud de la ley y reducirían los programas de empleo que esta ha creado.

Se reserva una animadversión especial para los vehículos eléctricos, que han sido el núcleo de la política climática de Biden. El manual intentaría revocar cualquier ley y normativa que privilegie a los vehículos eléctricos, ya sea mediante subvenciones o endureciendo las normas para los coches y camiones tradicionales.

Según denuncia Diana Furchtgott-Roth en un capítulo sobre el Departamento de Transporte:

El aumento de la producción de vehículos eléctricos hará que Estados Unidos sea más dependiente de China y otros países extranjeros que controlan el suministro y el procesamiento de los minerales de tierras raras necesarios para las baterías de los vehículos eléctricos. Y el despliegue más rápido de los vehículos eléctricos supondrá una gran presión para la vulnerable red eléctrica de Estados Unidos, lo que requerirá grandes inversiones en infraestructura crítica y un gran impulso en la producción eléctrica del país, incluyendo las centrales eléctricas de gas y petróleo.

Por supuesto, este argumento tiene otra cara: permitir que China domine el mercado de vehículos nuevos conlleva el riesgo de convertir la industria automovilística estadounidense en un lugar atrasado desde el punto de vista científico y comercial. No obstante, Furchtgott-Roth sostiene que debe ser el Departamento de Transporte y no la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quien controle las normas de ahorro de combustible, y que deben reducirse. Incluso afirma que estas normas son las responsables del reciente aumento de la conducción temeraria: «Una de las razones del elevado número de lesiones en las carreteras estadounidenses es que las normas nacionales de ahorro de combustible elevan el precio de los coches, lo que desincentiva a la gente a comprar vehículos más nuevos y seguros». (No aporta ninguna cita para respaldar esta afirmación). Furchtgott-Roth también sostiene que el Departamento de Transporte debería dar mayor importancia al uso compartido del automóvil, los vehículos autónomos y otras alternativas del sector privado al transporte público, que es más eficiente desde el punto de vista energético, pero está gestionado por el Gobierno.

En referencia al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Daren Bakst se queja de que, bajo el mandato de Biden, el Departamento ha «antepuesto el cambio climático y las cuestiones medioambientales a los requisitos más importantes de la agricultura: producir alimentos seguros de manera eficiente». En un argumento bastante confuso, se queja de que los dirigentes del USDA no se han centrado en la eficiencia agrícola, pero también de que Estados Unidos ya es líder mundial en producción eficiente. En cualquier caso, Bakst nunca aborda cómo el cambio climático podría afectar a la productividad y la asequibilidad de los

alimentos.

Project 2025 también flexibilizaría las regulaciones medioambientales en muchas áreas no relacionadas con el cambio climático, lo que produciría más contaminación del agua y el aire y eliminaría las medidas de protección de los animales salvajes. En muchos casos, los medios son técnicos, pero los resultados son simples: menos regulación y una aplicación menos rigurosa.

Por ejemplo, Gunasekara sugiere que la EPA debería abandonar prácticamente por completo sus esfuerzos por controlar las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), la clase de contaminantes a menudo denominados «químicos eternos». Sugiere reclasificarlos como «sustancias no peligrosas» y «revisar las normativas y políticas de limpieza de aguas subterráneas para reflejar los retos que plantean los contaminantes omnipresentes como los PFAS», es decir, tirar la toalla. También retiraría la aplicación de la Ley de Agua Limpia y reduciría los cuerpos de agua sujetos a ella.

La EPA también reduciría la regulación de los hidrofluorocarbonos y reconsideraría si 2064 —treinta y nueve años en el futuro— es un objetivo demasiado apresurado para restaurar la visibilidad natural en el aire. Aprobaría los productos químicos con mayor rapidez. La Ley de Especies en Peligro de Extinción se aplicaría menos y ya no incluiría a los lobos grises, los urogallos de las artemisas y los osos pardos en algunos lugares. El Departamento del Interior reduciría la supervisión de la industria del carbón en todos los ámbitos. Y el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca reinterpretaría la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige a las agencias federales evaluar el impacto medioambiental de cualquier proyecto de forma mucho más restrictiva.

Combustibles

El cambio radical que se aleja de la ciencia, la política y la aplicación de la ley en relación con el cambio climático es necesario para alcanzar el objetivo real de la visión energética de Project

2025: un gran impulso para ayudar a la industria de los combustibles fósiles.

Los autores sostienen que, en la actualidad, la nación se encuentra en una crisis energética causada «por políticas “verdes” extremas». «Detengan la guerra contra el petróleo y el gas natural», suplica Bernard L. McNamee en su capítulo sobre el Departamento de Energía. Al escribir sobre el Departamento del Interior (DOI), William Perry Pendley coincide: «Dado el grave impacto nacional de la guerra de Biden contra los combustibles fósiles, ninguna otra iniciativa es tan importante para el DOI bajo un presidente conservador como la restauración del papel histórico del departamento en la gestión de las vastas reservas de hidrocarburos de la nación». De hecho, Pendley considera que la extracción de recursos, más que la preservación de la Tierra, como objetivo casi único del Departamento del Interior.

A lo largo de sus pasajes sobre energía y medioambiente, este proyecto considera el lobby a favor de la salud medioambiental, en general, como un interés especial que no debe recibir una consideración especial, mientras que trata a las industrias del petróleo y el gas como si necesitaran la protección y el fomento del Gobierno. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump solicitó en privado a los ejecutivos petroleros mil millones de dólares en donaciones, prometiendo, a cambio, recortar la regulación medioambiental.

Al mismo tiempo que exigen el fin de las subvenciones a las energías renovables, los autores del documento buscan un trato ventajoso para las empresas de combustibles fósiles, lo que incluye ampliar el número de arrendamientos de terrenos federales para la perforación de gas y petróleo; permitir la perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) e incluso más en la Reserva Nacional de Petróleo, ambos en Alaska; y agilizar las aprobaciones y los permisos. No está claro si realmente existe un gran interés por perforar en algunos de estos lugares. En dos ocasiones en los últimos cuatro años, el Congreso ha exigido al Departamento del Interior que ofrezca concesiones en el ANWR, y en ambas ocasiones las ventas no han atraído a ninguna empresa importante de petróleo o gas. Este último recibe una atención

especial, con énfasis en el fomento de las exportaciones, la construcción de gasoductos y su uso para la generación de electricidad.

En algunos lugares, el afán por perforar es incluso risible. «La Administración Biden ha incumplido sus responsabilidades federales con los nativos americanos. Esto es inconcebible», se indigna Pendley. Esto parece plausible —el trato histórico del Gobierno hacia los nativos americanos ha sido atroz—, pero la siguiente frase toma un giro inesperado: «En concreto, la guerra de la Administración Biden contra los combustibles fósiles y las fuentes minerales disponibles a nivel nacional ha sido devastadora».

Project 2025 no se opone a las fuentes de energía alternativas en sí mismas. Los autores abogan por un mayor uso de la energía nuclear. No hablan del etanol, un tema políticamente delicado porque a los granjeros conservadores de Iowa les encantan las subvenciones para convertir el maíz en combustible, pero los conservadores fiscales las ven como una intervención inaceptable en el mercado. El documento no comparte el inexplicable odio de Trump hacia la energía eólica, pero sigue siendo escéptico. «Se necesita diversidad de recursos para garantizar la fiabilidad de la red. La presión para utilizar recursos 100% renovables o que no emitan carbono amenaza la fiabilidad de la red eléctrica», sostiene McNamee.

Aunque mantiene que la red eléctrica debe ser más fiable, McNamee ignora casi por completo la prueba A: el colapso de la red eléctrica de Texas durante las tormentas invernales de febrero de 2021, que causó cientos de muertes. El incidente ocurrió en un estado con un control conservador unificado. Y aunque tanto McNamee como el gobernador Greg Abbott culparon de los apagones a las energías renovables, las investigaciones realizadas por los reguladores y la Universidad de Texas han revelado que el principal culpable fue la generación de energía a partir de gas natural.

Cualquier enfoque que comience ignorando el abrumador consenso científico sobre el cambio climático está destinado a tener una relación conflictiva con la investigación científica, y esto es lo que ocurre con este Proyecto. «El Departamento de Energía debería cambiar de nombre y reorientarse como Departamento de

Seguridad Energética y Ciencias avanzadas», escribe McNamee. «Estados Unidos está perdiendo su dominio en los descubrimientos científicos y el desarrollo tecnológico».

Aun así, pide el cierre de varias oficinas del Departamento de Energía relacionadas con la investigación, incluida la nueva Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Energía, un centro de investigación para la tecnología energética. En la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Gunasekara quiere un gran aumento de los cargos políticos que supervisan a los científicos, incluido el nombramiento de un jefe de gabinete político para gestionar toda la Oficina de Contaminación Atmosférica. Añadiría al menos seis altos cargos políticos para vigilar y «reformar» la investigación y la ciencia de la Agencia; y un cargo político que supervisaría las subvenciones y determinaría — presumiblemente de forma diferente a los científicos— qué proyectos son «más necesarios» y «mejorarán tangiblemente el medioambiente».

Una contradicción aún más evidente en todos los pasajes relacionados con la energía y el medioambiente es de carácter económico. En particular, los autores le otorgan privilegio de forma sistemática a los precios al consumo a corto plazo por encima de cualquier otra consideración, incluyendo no solo los costes futuros de las políticas que defienden, sino también importantes externalidades. Esto ocurre cuando Furchtgott-Roth sugiere abandonar los vehículos eléctricos o cuando argumenta que el único objetivo del Departamento de Transporte debería ser «facilitar los desplazamientos y abaratarlos», es decir, a corto plazo. Esto aparece en la indiferencia de Gunasekara hacia las sustancias perfluoroalquiladas y el cambio climático, y se manifiesta en la preocupación por disponer de alimentos baratos ahora a costa de no tener suficientes más adelante.

Los cargos electos son muy propensos a adoptar soluciones a corto plazo que les ayuden a ganar las siguientes elecciones. La ventaja de iniciativas complejas como Project 2025 es que permiten a los expertos en política formular propuestas sin tener que rendir cuentas por los efectos electorales inmediatos. Si los expertos piensan con la misma falta de perspectiva que los políticos, ¿qué sentido tiene?

Capítulo 5

Política exterior y defensa

Los autores de Project 2025 imaginan a los diplomáticos y el Ejército estadounidenses librando una guerra en dos frentes. El primero consistiría en contener el poder expansionista de China en Asia y en todo el mundo. El segundo, frenar la propagación del progresismo y la ideología «woke» dentro del Departamento de Estado, el Pentágono y la Comunidad de Inteligencia, y sustituirlos por ideales conservadores.

Ellos no lo describirían precisamente así, pero en los capítulos que tratan sobre el Ejército, el espionaje y la diplomacia, los autores ponen mucho más énfasis en estos dos temas que en cualquier otro. Las luchas contra China y el progresismo interno están conectadas: si se leen en su conjunto, estos capítulos son un llamamiento a retomar la mentalidad de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza existencial. Toda la nación y todos los órganos del Gobierno deben movilizarse ideológicamente y alinearse para contrarrestarla, lo que requiere purgar el progresismo del establishment de la defensa nacional.

«Sin duda, el peligro más significativo para la seguridad, las libertades y la prosperidad de los estadounidenses es China», escribe Christopher Miller, quien ocupó brevemente el cargo de secretario de Defensa en funciones entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Los autores consideran que la próxima etapa de la historia mundial será una era de gran competencia entre potencias, y predicen que Estados Unidos verá menos «guerras pequeñas» como las que ha librado en todo el mundo desde el final de la Guerra Fría, y que, en cambio, deberá prepararse para grandes conflictos terrestres como los que libró durante el siglo XX.

Para hacer frente a esta situación, Miller recomienda que se amplíen las Fuerzas Armadas, un aumento del gasto en defensa y una modernización exhaustiva del arsenal nuclear estadounidense.

En el ámbito diplomático, Kiron K. Skinner, exjefe de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, aboga por «el cambio más significativo en los principios básicos de la política exterior y las medidas correspondientes desde el fin de la Guerra Fría». Propone recortar sin piedad la financiación de cualquier organismo internacional (como las agencias de la ONU) que no apoye la política estadounidense, mientras que Max Primorac, ex alto funcionario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aboga por que la ayuda exterior se convierta en un arma de la política estratégica estadounidense. (En sus primeras semanas en el cargo, Trump tomó medidas para cerrar la USAID).

Aunque belicoso, no se trata de un retorno a los días neoconservadores de promoción de la democracia e intervencionismo exterior. Rechazando el optimismo del fin de la historia de la década de los 90, estos autores tienen una visión sombría y pesimista del mundo, pero su enfoque no encaja con la forma en la que Donald Trump se ha presentado a sí mismo como el candidato de la paz. Como presidente, impulsó un repliegue y, fuera del cargo, acusó a Joe Biden de avivar la «Tercera Guerra Mundial» con su apoyo a Ucrania contra Rusia y su gestión de las crisis en Oriente Medio.

En realidad, la postura conciliadora de Trump siempre ha sido más aparente que real. Como presidente, ha coqueteado con el uso de la fuerza militar en todo el mundo. Amenazó a Corea del Norte «con fuego y furia como el mundo nunca ha visto», reflexionó en voz alta sobre un posible despliegue de tropas en Venezuela[16], ordenó un lanzamiento de misiles (que nunca se llevó a cabo) para matar al exdictador Bashar al-Assad y consideró la posibilidad de lanzar ataques contra los carteles dentro de México. Aun así, la visión de Project 2025 y la de Trump presentan diferencias significativas, especialmente en lo que respecta a Rusia. Skinner reconoce con cautela que la guerra de Rusia contra Ucrania «divide claramente a los conservadores», pero insiste en que «todas las partes están de acuerdo en que la invasión de Ucrania por parte de Putin es injusta y que el pueblo ucraniano tiene derecho a defender su patria[...]. El conflicto redujo la fuerza militar de Putin y dio un impulso a la unidad de la OTAN y a su importancia para las naciones europeas».

De hecho, Trump no siempre ha estado de acuerdo. Además, los planes esbozados en Project 2025 requerirían un enorme aumento del gasto en defensa, el pedazo más grande de los fondos discrecionales del presupuesto federal, en un momento en que Trump tiene como objetivo reducir costes. El futuro del gasto del Pentágono dependerá de las batallas internas entre los halcones presupuestarios y los halcones de la defensa dentro de la administración.

Los departamentos de Estado y Defensa resultan familiares, no obstante, los otros dos organismos que se analizan aquí, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Comunidad de Inteligencia, son menos conocidos, este último de manera deliberada. La USAID es una agencia independiente, lo que significa que su director es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, y no forma parte de ningún departamento. Financia la ayuda y el trabajo de desarrollo en todo el mundo, y su presupuesto suele ascender a decenas de miles de millones de dólares al año, lo que supone menos del 1% del presupuesto federal. Los estadounidenses suelen sobreestimar lo que el país gasta en ayuda, llegando a calcular que supone hasta una cuarta parte del presupuesto.

La Comunidad de Inteligencia es un término utilizado para referirse a las numerosas y dispares agencias federales de inteligencia, entre las que se incluyen entidades destacadas como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la División de Inteligencia del FBI; una serie de agencias de inteligencia del Departamento de Defensa; y organismos poco conocidos como la Inteligencia de la Guardia Costera y la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Departamento de Energía. En pocas palabras, todas ellas recopilan información —secreta y pública— y la analizan para que la utilice el Gobierno. Las investigaciones posteriores a los atentados del 11 de septiembre revelaron que la falta de comunicación entre los distintos organismos había obstaculizado la capacidad del país a la hora de detener los atentados. El Congreso creó la Oficina del director de Inteligencia Nacional como organismo coordinador, pero dos décadas después, su función sigue siendo objeto de controversia. El director de Inteligencia Nacional se designa como el principal asesor de Inteligencia del presidente, pero no tiene control

directo sobre las agencias de la Comunidad de Inteligencia.

La purga progresista

Project 2025 sostiene que la única forma de reformar el Gobierno, tanto de manera radical como mundana, es cambiar quién trabaja en él. En materia de política exterior, defensa e inteligencia, en parte se trata de responder a las prioridades presidenciales, superando la resistencia de los funcionarios públicos que se oponen ideológicamente o simplemente se resisten al cambio. Los autores también consideran que la renovación de la plantilla es una forma de exigir mayor responsabilidad y combatir la cautela excesiva en una burocracia —especialmente en el Pentágono — que ambos partidos reconocen como sobredimensionada y enrevesada. Pero estas secciones de Project 2025 también sugieren que los funcionarios desempeñan un papel ideológico aparte del político. Si bien Estados Unidos está librando una guerra global contra el Partido Comunista Chino, los autores proponen una purga política que alinee los departamentos y agencias del Gobierno orientados al exterior con el dogma conservador.

Se trata del resurgimiento de un enfoque anticuado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apostó por una alianza con el líder nacionalista chino Chiang Kai-Shek, pero tras la guerra, los comunistas de Mao Zedong tomaron el poder; Chiang huyó a Taiwán. La derrota tomó por sorpresa a Estados Unidos y alimentó el pánico sobre un poderoso eje comunista sinosoviético. La culpa recayó sobre los funcionarios de carrera estadounidenses del Departamento de Estado, los «expertos en China», a quienes se acusó no solo de no haber previsto el ascenso de Mao, sino también de simpatizar en secreto con los comunistas. El senador Joseph McCarthy, republicano por Wisconsin, utilizó la llamada pérdida de China para respaldar sus afirmaciones sobre la infiltración comunista en el Gobierno estadounidense. McCarthy argumentó que un Gobierno que no estuviera dogmáticamente unificado podría perder la Guerra Fría, y miles de empleados federales fueron despedidos por delitos grandes y pequeños, algunos reales, pero la

mayoría imaginarios.

A diferencia de McCarthy, los autores del Project 2025 no parecen creer que los funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado simpatizan en secreto con el Partido Comunista Chino, pero sí creen que estos trabajadores se interponen en el camino de una política de derecha enérgica, y consideran que el progresismo (especialmente lo «woke», a menudo invocado, pero nunca definido) se acerca demasiado al marxismo. Creen que se trata de un cáncer que debilitará la capacidad de Estados Unidos para derrotar a China.

Este impulso por la corrección ideológica encaja bien con los enfrentamientos de Trump con sus subordinados. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump tuvo repetidos enfrentamientos con el personal del Pentágono y del Departamento de Estado, que se resistían a sus ideas. Muchas de las objeciones no provenían del personal de carrera, sino de sus propios nombramientos. Según se informa, el secretario de Estado Rex Tillerson llamó a Trump «imbécil» y más tarde declaró en la revista Foreign Policy que «Su comprensión de los acontecimientos mundiales, su comprensión de la historia mundial, su comprensión de la historia de Estados Unidos era realmente limitada. Es muy difícil mantener una conversación con alguien que ni siquiera entiende por qué estamos hablando de esto».

James Mattis, el general retirado con cuatro estrellas de la Marina que ocupó el cargo de secretario de Defensa, ignoró supuestamente las instrucciones de Trump que consideraba peligrosas, y más tarde declaró: «Donald Trump es el primer presidente de mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera lo finge. En cambio, trata de dividirnos». Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto elegido personalmente por Trump, ha sido un crítico tan destacado desde su jubilación que Trump sugirió en 2023 que Milley debería ser ejecutado por traición.

El primer impeachment contra Trump comenzó tras una denuncia presentada por el teniente coronel Alexander Vindman, un oficial del Ejército en servicio activo destinado al Consejo de Seguridad Nacional, sobre la presión ejercida por Trump al Gobierno ucraniano para que iniciara una investigación sobre Hunter Biden.

Entre los testigos principales del juicio político que siguió se encontraban tanto funcionarios de carrera como personal del Departamento de Estado.

Si así es como ven a Trump los altos cargos de la Administración, uno puede imaginarse lo que piensan algunos empleados de carrera. A decir verdad, la negativa de Mattis a cumplir órdenes, aunque quizá sea prudente en casos concretos como el ataque contra Assad, sienta un peligroso precedente para el control democrático sobre los funcionarios no elegidos en las urnas, y ha proporcionado munición para las luchas por el poder como la que se contempla en Project 2025.

Sin embargo, dado que ningún plan político puede cambiar a Trump, Project 2025 tiene como objetivo reemplazar a las personas que trabajan para él. Los autores se quejan de que el Senado actúa con demasiada lentitud a la hora de confirmar a los nombramientos políticos, y recomiendan que el presidente cubra los puestos vacantes con funcionarios interinos, lo que margina a los funcionarios de carrera y ejerce cierta presión sobre el Senado para que confirme a quienquiera que sea nombrado.

Skinner sostiene que «una fuente importante… de la ineficacia del Departamento de Estado radica en su creencia institucional de que se trata de una institución independiente que sabe lo que es mejor para los Estados Unidos, establece su propia política exterior y no necesita la dirección de un presidente electo». En realidad, ningún presidente —ni ningún secretario de Estado— puede tener un conocimiento detallado de todas las regiones y relaciones internacionales, por lo que el Departamento de Estado, el Pentágono y la Comunidad de Inteligencia deben poder funcionar de forma semiautónoma. Aun así, el control político es esencial para la gobernanza democrática.

No obstante, la lucha contra el supuesto sesgo político es más difícil de justificar. En estos capítulos, los autores muestran una fijación por lo que consideran un sesgo liberal a lo largo de todos los departamentos correspondientes y una inyección inadecuada de política en la creación de normativas y políticas estatales. Estos argumentos son atractivos a primera vista —¿quién quiere politización donde no corresponde?— y, a veces, incluso dan en el

blanco: los autores tienen motivos egoístas para criticar a los generales y exfuncionarios de inteligencia que se han involucrado en la política partidista, pero esto realmente pone en peligro la percepción de imparcialidad. El problema reside en que los autores desean claramente un proyecto concertado de politización de la derecha, no la neutralidad.

Se preveía que la purga comenzara en la Casa Blanca. En su capítulo sobre el personal presidencial, Russell Vought sugiere lo que podría denominarse una disposición anti-Vindman (el coronel que denunció a Trump) concebida para eliminar las objeciones de conciencia a la nueva política. El asesor de seguridad nacional «debería reincorporar a todos los empleados federales en comisión de servicios (detailees[17]) no esenciales a sus agencias de origen en su primer día de mandato, de modo que la nueva Administración pueda proceder de manera eficiente sin las minas terrestres de personal dejadas por los anteriores administradores y, tan pronto como sea posible, debería sustituir a todos los detailees federales esenciales por personal alineado con las prioridades del nuevo presidente». El nuevo asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, asignó a muchos de estos empleados a cuestiones como Ucrania e Irán el 22 de enero de 2025.

En un ejemplo evidente del traspaso de poder a la Casa Blanca, Vought también afirma que el Consejo de Seguridad Nacional «debería revisar rigurosamente todos los ascensos de oficiales generales y de alto rango para priorizar las funciones y responsabilidades del Ejército por encima de las cuestiones de ingeniería social y no relacionadas con la defensa, como el cambio climático, la teoría crítica de la raza, el extremismo fabricado y otras políticas polarizadoras que debilitan nuestras Fuerzas Armadas y desalientan a los mejores hombres y mujeres de nuestra nación a alistarse». Christopher Miller está de acuerdo y afirma: «Este es ahora el cuerpo de oficiales generales de Barack Obama», lleno de líderes ascendidos «por razones distintas a su destreza en el combate».

Miller ofrece mandatos contradictorios a los generales. Aunque pide que se vuelva a centrar la atención en la lucha, también quiere que los generales se responsabilicen de revertir el descenso del apoyo

público al Ejército, lo que, en la práctica, supone una maniobra de marketing. La teoría de Miller sobre este descenso se basa en que las Fuerzas Armadas se han convertido en «el campo de experimentación social de la nación» y en una herramienta de «una agenda de ingeniería social». Nunca explica exactamente qué significa eso, y el Ejército a menudo ha estado por delante de la sociedad estadounidense en su conjunto: eliminó la segregación en 1948, seis años antes del caso de Brown contra la Junta de Educación, y abolió la política de «No preguntes, no digas» para los miembros LGBTQ+ del servicio cuatro años antes de que el Tribunal Supremo legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El capítulo de Miller sugiere que, en realidad, solo pretende moldear socialmente el Ejército a su gusto. Quiere «eliminar el adoctrinamiento marxista y los programas divisivos de teoría crítica racial»; abolir las oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión; reincorporar a los miembros del servicio dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID-19; revisar los planes de estudio en escuelas para hijos de militares; y acabar con las plazas fijas en las academias militares, lo que probablemente provocaría una fuga de cerebros del profesorado.

Miller cree que estas políticas progresistas son las responsables de una preocupante caída en el reclutamiento y que eliminarlas resolvería el problema, aunque no ofrece muchas pruebas que respalden su opinión. Durante años, las Fuerzas Armadas han tenido dificultades para alcanzar sus objetivos de reclutamiento, y él cree que nada más el Ejército debe aumentarse con cincuenta mil personas. Sin embargo, el deseo de ampliar las filas entra en conflicto con las recomendaciones de Miller de que las Fuerzas Armadas expulsen a los miembros transgénero y seropositivos, y eliminen las herramientas de reclutamiento dirigidas a los grupos infrarrepresentados. En sus primeros días, la segunda administración Trump cerró los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del Pentágono, ordenó la reincorporación de los miembros dados de baja por negarse a vacunarse y tomó medidas para expulsar a los miembros transgénero.

Algunas de estas contradicciones aparecen en el capítulo de Dustin

J. Carmack sobre la Comunidad de Inteligencia (IC). Trump se convenció antes de su primera toma de posesión de que la Comunidad de Inteligencia estaba en su contra, y su relación con las agencias de espionaje no hizo más que empeorar. En una rueda de prensa celebrada en 2018 con el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó, no sin generar polémica, que confiaba en los desmentidos de Putin sobre la interferencia electoral más que en las evaluaciones de la Inteligencia de Estados Unidos. (Los notables fracasos de la Comunidad de Inteligencia antes del 11-S y la guerra de Irak la convierten en un blanco fácil).

En 2019, Trump despidió al director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, por lealtad insuficiente y nombró a John Ratcliffe como candidato, un congresista poco conocido de Texas, para sustituirlo. El Senado rechazó a Ratcliffe cuando quedó claro que tenía muy poca experiencia en Inteligencia y que había exagerado la poca que tenía. No obstante, Trump lo volvió a nombrar en 2020, esta vez con éxito. Como director de la Inteligencia Nacional, divulgó información no verificada y dudosa sobre la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, en lo que se interpretó mayormente como un intento de ayudar a la campaña de Trump en 2020. Trump eligió a Ratcliffe para dirigir la CIA en su segundo mandato.

Por eso produce vértigo leer a Carmack, antiguo ayudante de Ratcliffe, argumentando que la Comunidad de Inteligencia debe protegerse de la «politización ascendente y descendente» y quejándose de que los líderes han sido «seleccionados por sus opiniones o lealtades políticas en lugar de por su experiencia y conocimientos». En principio, Carmack tiene razón: la politización de la Inteligencia allanó el camino para la guerra de Irak, y un presidente que recibe información filtrada por la ideología puede ser menos capaz de tomar buenas decisiones. Por el contrario, una buena Inteligencia que entre en conflicto con los objetivos del presidente puede frenarlo o avergonzarlo.

Aun así, nada de esto sugiere un interés genuino en eliminar la influencia política, sino todo lo contrario. Aunque Carmack expresa su preocupación por la represión de las voces discrepantes dentro de la Comunidad de Inteligencia (IC), también advierte que los funcionarios deben ser neutrales y no utilizar «sus cargos y su

acceso privilegiado a la información para influir de manera indirecta o directa en la elaboración de políticas de forma inadecuada (especialmente mediante el alarmismo de las amenazas)». En otras palabras, si no estás de acuerdo con el presidente y sus nombramientos, mantén la boca cerrada. De hecho, Carmack exige el despido fulminante de cualquier empleado que sea sospechoso de filtrar información a la prensa o al público. Mientras tanto, los ataques de Trump a la Comunidad de Inteligencia no se mencionan.

En otro intento fallido por reconocer una contradicción evidente, Primorac se queja de que, bajo el mandato de Biden, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) persiguió «una agenda política y cultural polarizada que promueve el aborto, el extremismo climático, el radicalismo de género y las intervenciones contra el racismo sistémico percibido», lo que, según él produjo un «ambiente de trabajo hostil» para los empleados conservadores, pero elogia a la USAID de Trump por instaurar «políticas provida y favorables a la familia».

El Pentágono y las Fuerzas Armadas

Las propuestas sobre el Departamento de Defensa merecen especial atención, no únicamente por la inclinación de Trump a ocuparse personalmente de la diplomacia o por su desconfianza hacia la Comunidad de Inteligencia, sino por su magnitud. El gasto en defensa representa alrededor del 13% del presupuesto federal, apenas por detrás de los programas de seguro médico y la Seguridad Social.

Project 2025 propone aumentar aún más el presupuesto de defensa. Miller pretende que el Ejército incorpore suficientes soldados como para poder librar y ganar dos guerras regionales importantes al mismo tiempo. Asimismo, aboga por modernizar y ampliar el arsenal nuclear existente para mantener una fuerza disuasoria contra China y Rusia. Quiere que el Pentágono aumente la compra de aviones de combate F-35A, que cuestan más de ochenta millones de dólares por unidad,

pasando de 42 en el presupuesto de 2025 a entre sesenta y ochenta al año. Miller reformaría el proceso del Pentágono para desarrollar, comprar y vender armas a países amigos, alineándose con un amplio consenso bipartidista. Por último, quiere que el Ejército esté disponible para vigilar la frontera de Estados Unidos.

«La realidad es que alcanzar estos objetivos requerirá un mayor gasto en defensa, tanto por parte de Estados Unidos como de sus aliados, así como un apoyo activo a la reindustrialización y un mayor respaldo a la capacidad productiva de los aliados para que podamos ampliar juntos nuestros esfuerzos en el mundo libre», escribe. Sin embargo, este objetivo entra en conflicto con la opinión mayoritaria de los estadounidenses, que ya creen que Estados Unidos gasta demasiado en defensa, así como con la de Elon Musk, cuyo «Departamento de Eficiencia Gubernamental», bendecido por Trump, ha pedido recortes en defensa.

Miller respalda un controvertido plan para reorganizar el Cuerpo de Marines, devolviéndolo a una fuerza más ligera y de base naval, al que se oponen Mattis y muchos otros generales retirados con cuatro estrellas de los Marines. Miller tiene poco que decir sobre la Armada, que ha sufrido una serie de desastres en los últimos años, entre ellos colisiones en el mar, la catastrófica pérdida de un buque atracado en San Diego y el fiasco de los buques de combate litorales, una nueva y costosa clase de buque de guerra considerado un fracaso. La Fuerza Aérea, advierte, «carece de una estructura de fuerzas con la letalidad, supervivencia y capacidad necesarias para librar un conflicto importante con una gran potencia como China, disuadir las amenazas nucleares y cumplir con sus otros requisitos operativos en el marco de la Estrategia de Defensa Nacional». Miller se muestra más entusiasmado con el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Considera que, incluso en un mundo de gran competencia entre potencias, los operadores especiales representarán «una piedra angular de la estrategia de seguridad». (Quizá no sea de extrañar que el propio Miller haya sido militar de las Fuerzas Especiales, conocidas como «boinas verdes»). Al igual que Skinner y Carmack, Miller recomienda que Estados Unidos se prepare para una guerra cibernética a gran escala. Se muestra escéptico con respecto a los acuerdos de control de armas.

Enfrentarse a China

La preocupación central de la mayoría de estas ideas estructurales es el conflicto, si no necesariamente una guerra abierta, con China. Esta conclusión no es sorprendente. De hecho, se ha convertido en una idea dominante de ambos partidos. Barack Obama intentó una política exterior de «giro hacia Asia» para contrarrestar a China, Trump empleó un discurso duro y Biden continuó con el enfoque más conflictivo. Aun así, a los autores les preocupa que el público, y parte del Gobierno, sigan sin entender el enfrentamiento como la lucha generacional global que ellos ven.

El propio enfoque de Trump hacia China ha sido algo confuso. Retóricamente, ha atacado a China más que cualquier otro presidente en generaciones, criticando al Partido Comunista y acusando a Beijing de manipulación monetaria y prácticas comerciales desleales. Sin embargo, en la práctica, se ha mostrado en gran medida conciliador con China y con el presidente Xi Jinping. La guerra comercial contra China durante su primer mandato resultó, en el mejor de los casos, infructuosa. Trump evitó atacar a Xi por su represión de la democracia en Hong Kong, cuestionó el valor de la defensa de Taiwán por parte de Estados Unidos frente a la agresión china y (según el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton) aprobó en privado los campos de concentración de Xi para las minorías uigures de China.

Project 2025 no tiene nada de esta ambivalencia. Skinner nombra a China como la principal prioridad diplomática de la nación. «Estados Unidos debe tener una respuesta estratégica que imponga costes para que la agresión de Beijing resulte inasumible, incluso si la economía y el poder estadounidenses siguen creciendo», escribe. «Esta postura requerirá un crecimiento real, sostenido y casi sin precedentes de Estados Unidos; alianzas más sólidas; políticas económicas y de seguridad sincronizadas; y la independencia energética estadounidense». Como parte de este impulso, Primorac sostiene que USAID debe desempeñar un papel directo en la lucha contra la Iniciativa del

Cinturón y Ruta de la Seda de China, un programa de gasto masivo en infraestructura global en los países en desarrollo. Carmack pide el apoyo de «las empresas estadounidenses, las compañías tecnológicas, las instituciones de investigación y el mundo académico... en esta lucha generacional para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, intereses económicos, nuestra soberanía nacional y propiedad intelectual», aunque, haciéndose eco del antiguo debate de «¿Quién fue el responsable de que China cayera en manos del comunismo?», advierte sobre «los activistas e inversores de izquierda que ignoran la amenaza china».

Si estos esfuerzos diplomáticos y económicos fracasan, el Ejército debe estar preparado. «La estrategia de defensa de Estados Unidos debe identificar a China de manera inequívoca como la máxima prioridad para la planificación de la defensa estadounidense», escribe Miller. Recaba más ayuda de los aliados para hacer que China retroceda en Asia. Y, en contraposición con Trump, presenta argumentos de peso de que la defensa de Taiwán es esencial para el interés de Estados Unidos para contener a China.

El resto del mundo

Derrotar tanto a China como a la burocracia «woke» apenas deja margen para centrarse en otras cosas, pero Project 2025 da una idea de cómo ven sus autores al resto del mundo y el lugar que ocupa Estados Unidos en este.

Skinner aboga por tener mano dura frente a los adversarios de todo el mundo, sin embargo, ofrece pocos detalles sobre cómo se llevaría a cabo. Por ejemplo, escribe que «Estados Unidos no puede permitir que [Corea del Norte] siga siendo una potencia nuclear de facto con capacidad para amenazar a Estados Unidos o a sus aliados», pero no dice cómo impedirlo por la vía diplomática. La tan publicitada cumbre de 2018 entre Trump y Kim Jong-un no lo logró. Miller quiere ayudar a Corea del Sur a ser capaz de manejar la defensa convencional contra Corea del Norte, dejando a Estados Unidos manejar la disuasión nuclear. Skinner considera a la India un aliado

importante y un contrapeso a China en Asia.

En Oriente Medio, Skinner también defiende una línea dura con Irán, pero no ofrece ideas concretas más allá de sanciones muy estrictas. Retiraría la financiación a la Autoridad Palestina y utilizaría los Acuerdos de Abraham, el marco de paz del primer mandato de Trump, para alinear aún más a Israel y a los gobiernos árabes. Está especialmente interesada en estrechar lazos con Arabia Saudí, un objetivo que no encaja con su profesada «preocupación por los derechos humanos y los derechos de las minorías». Primorac obligaría a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a dejar de prestar ayuda a la población civil en lugares como Yemen y Afganistán, que sufren graves catástrofes humanitarias, pero cuyos gobiernos son hostiles a Estados Unidos.

Skinner sostiene que Estados Unidos debe hacer más en el África subsahariana, especialmente para contrarrestar la influencia china, pero que debería centrarse más en generar crecimiento a largo plazo que en proporcionar ayuda directa. Tanto ella como Primorac desean impulsar la economía de libre mercado en América Latina, donde los izquierdistas siguen siendo populares. Skinner argumenta que la expansión de China significa que Estados Unidos debe trabajar para «trasladar la fabricación y la industria mundiales de puntos más lejanos alrededor del planeta a países de América Central y del Sur». Eso será difícil de lograr si Trump amenaza con nuevos aranceles a estos países.

Con todo, Europa ha quedado prácticamente en el olvido. Durante su primer mandato, Trump amenazó con abandonar la OTAN y presionó con fuerza a los miembros para que aumentaran su gasto en defensa, con un éxito considerable. Miller quiere permitir que Estados Unidos reduzca aún más su presencia física en Europa para poder centrarse en China, confiando en los aliados de la OTAN para disuadir a Rusia. A pesar de los ataques de Trump a la OTAN, Skinner considera que la alianza es crucial para evitar que China y Rusia dominen el Ártico, un escenario emergente de competencia debido a sus recursos naturales[18]. Si la necesidad de cooperación en el Ártico salva a la OTAN, tal vez a los aliados europeos no les pese tanto quedarse a la intemperie.

Nota sobre las fuentes

La fuente principal de este libro es, obviamente, Mandate for Leadership, de Project 2025. También me he apoyado en los años que cubrí la política y a Donald Trump, pero en algunos pasajes he recurrido a valiosos trabajos periodísticos externos sobre Project 2025 y sus principales responsables, a entrevistas publicadas en línea y a otros materiales. Para consultar las referencias de esas fuentes, véanse las notas finales en:

davidagraham.com/the-project-endnotes.

Fuentes de las notas a pie de página

Ballotpedia. (s.f.). Donald Trump presidential cabinet, 2017-2021. https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_Cabinet,_2017-2021

«Boston Tea Party». (2026). En Britannica. https://www.britannica.com/event/Boston-Tea-Party

Brown, M. (2026). In his own words: Stephen Miller's arguments for White House actions in US cities and abroad. Associated Press. https://apnews.com/article/stephen-miller-venezuela-greenland-minneapolis-ba175d90c0d34730cafd2a64df70be82

Cornell Law School (2025). Unitary Executive Theory (UET). Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/wex/unitary_executive_theory_%28uet%29

Edmonson, C. y Kanno-Youngs, Z. (2025). Government Reopens as Trump Signs Bill to End Nation's Longest Shutdown. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/11/12/us/politics/government-shutdown-vote-trump.html?searchResultPosition=8

European Commission. (s.f.). Conflict Minerals Regulation. https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/conflict-minerals-regulation_en

Fundación Instituto Roche. (s.f.). Ganancia de función. Glosario de genética. https://www.institutoroche.es/recursos/glosario/Ganancia+de+funci%C3%B3n

Hunter Biden. (2026). En Britannica. https://www.britannica.com/biography/Hunter-Biden

Jakes, L. (2026, 14 de enero). If U.S. were to Invade Greenland, «Nato would be Stuck». The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/01/14/world/europe/trump-greenland-nato.html

LeVinne, M. (2025). Judge blocks Trump's broad expansion of expedited removal of migrants. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/immigration/2025/08/29/trump-deportation-expedited-removal/?utm_source=chatgpt.com

Liptak et al. (2026, 3 de enero). De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/03/eeuu/asi-captura-nicolas-maduro-venezuela-trax

Marcius, C. y Moore, R. (2025). «We Are All Charlie»: Thousands Stood in Line for Hours in Hopes of Paying Tribute. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/09/21/us/politics/charlie-kirk-tribute-state-farm-stadium.html?searchResultPosition=13

Montanaro, D. (2016). Hillary Clinton's «Basket Of Deplorables,» In Full Context Of This Ugly Campaign. NPR. https://www.npr.org/2016/09/10/493427601/hillary-clintons-basket-of-

deplorables-in-full-context-of-this-ugly-campaign

Prados, J. (2013). Telemedicina, una herramienta también para el médico de familia. ELSEVIER, Vol. 45. (Núm. 3), 129-132 https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-telemedicina-una-herramienta-tambien-el-S0212656712003484

Sun, A. (2026, 17 de enero). How Many People Has Trump Deported So Far? The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2026/01/18/us/trump-deportation-numbers-immigration-crackdown.html?searchResultPosition=2

Thrush, G. y Smith, C. (2026). Federal Prosecutors Open Investigation Into Fed Chair Powell. The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/jerome-powell-fed-inquiry-trump.html

USLegalforms.com. (s.f.). Detailee: A Comprehensive Guide to Its Legal Definition and Context. https://legal-resources.uslegalforms.com/d/detailee#laws

Vuelo 93 de United Airlines. (17 de diciembre de 2025). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_93_de_United_Airlines

Agradecimientos

Gracias a Marie Pantoja, a Azraf Khan y a Hilary Edmonton de Random House, por su inspiración editorial, sabias sugerencias y sus juiciosos recortes; a mi paciente agente Gary Morris, de la agencia David Black; y a las excelentes correctoras Sofia Bliss-Carrascosa, Nicole Kagan y Nina Moske, que me ayudaron a evitar varios errores. (Cualquier error que quede es solo mío).

Gracias también a Yoni Appelbaum, Rebecca Rosen, Adrienne LaFrance, Jeffrey Goldberg, Sarah Ball, Devin Gordon, Tom Watson, J. J. Gould, Bob Cohn, Adam B. Kushner, Susannah Meadows, David Giffels, Ben Terris, Molly Ball, Krishnadev Calamur, Kathy Gilsinan, Adam Serwer, Bill Adair, Bronwen Dickey, Sean Flynn, Louise Jarvis Flynn, Stephen Buckley y mis muchos queridos compañeros de The Atlantic, especialmente a los miembros de The Atlantic Union.

Por último, también quiero dar las gracias a Michael Graham, Elizabeth Armstrong, Kate Graham y Sean Graham; a Alex e Isobel por su paciencia y tolerancia; y, lo más importante, siempre, a Leslie.

Sobre el autor

David A. Graham es redactor de The Atlantic, donde cubre política y asuntos nacionales. Ganó el Premio Toner a la Excelencia en Periodismo Político Nacional por su cobertura de las elecciones presidenciales de 2020. Vive en Carolina del Norte.

Notas

1. Nota del editor Esta visión maximalista del poder presidencial es apoyada por una teoría del derecho constitucional estadounidense de larga trayectoria: la teoría del ejecutivo unitario. Sus defensores interpretan el ejecutivo como una rama gubernamental bajo la única autoridad del presidente, lo que le permitiría algunos de estos poderes (o todos ellos). (Cornell Law School, 2025).

2. Nota del editor El vuelo 93 de United Airlines fue uno de los cuatro aviones secuestrados por Al-Qaeda durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cubría el trayecto entre Nueva Jersey y San Francisco y transportaba 37 pasajeros y 7 tripulantes. Fue el único de los cuatro aparatos que no llegó a su objetivo, ya que se estrelló en un campo de Shanksville (Pensilvania). Jálid Sheij Mohámed (principal arquitecto del 11-S) confirmó que el avión se dirigía al Capitolio de los Estados Unidos. («Vuelo 93 de United Airlines», 2025).

3. Nota del editor Carson ejerció como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miller como secretario de Defensa y Ratcliffe como director de Inteligencia Nacional. (Ballotpedia, s.f.).

4. Nota del editor Movimiento conservador en el ámbito fiscal que emergió dentro del Partido Republicano en 2007. Sus defensores llamaban a la reducción de la deuda nacional y el déficit presupuestario, se oponían a los impuestos elevados y apoyaban un control mayor en materia de inmigración. Fue bautizado Tea Party por el Boston Tea Party (Motín del té), momento de inflexión en la lucha por la independencia de Estados Unidos. («Boston Tea Party», 2026).

5. Nota del editor Dans hace referencia a un comentario peyorativo que hizo Hilary Clinton en su campaña de 2016, al referirse a la mitad de los votantes de Trump como «una pila de deplorables». Muchos simpatizantes de Trump se reapropiaron del término posteriormente. (NPR, 2021).

6. Nota del editor Charlie Kirk fue asesinado al recibir un disparo mortal de un francotirador en el transcurso de un mitin el 10 de septiembre de 2025. A su funeral conmemorativo, presidido por Trump y los máximos representantes del movimiento MAGA, asistieron unas 100 000 personas. (The New York Times, 2025).

7. Nota del editor El último cierre gubernamental ocurrió en octubre y noviembre de 2025 y duró 43 días, el más largo de la historia, bajo la Administración de Trump. Marca la tercera que ocurre bajo su mandato, cuando tan solo ha habido once en la historia moderna de Estados Unidos. (The New York Times, 2025).

8. Nota del editor El hijo infame de Joe Biden que fue condenado por posesión ilegal de armas de fuego y luego perdonado por su padre poco antes de que se acabara su presidencia. («Hunter Biden», 2026).

9. Nota del editor Servicios de salud promovidos y prestados a través de tecnologías de la comunicación. (Prados, 2013).

10. Nota del editor Tipo de mutación que resulta en un producto genético alterado que posee una nueva función molecular o un nuevo patrón de expresión genética (Fundación Instituto Roche, s.f.)

11. Nota del editor Subdirector del gabinete de políticas de la Casa Blanca para la segunda Administración Trump, vocero de larga trayectoria en pro de medidas draconianas para combatir la inmigración y ávido defensor de la visión imperialista que Trump aplica en su política exterior. (Associated Press, 2026).

12. Nota del editor El límite de las 100 millas (≈160 km) y 14 días para las entradas por frontera terrestre sigue siendo la referencia práctica mientras los tribunales mantienen bloqueada —por falta de debido proceso— la expansión nacional que anunció el DHS en enero de 2025, que ampliaba el uso de la expedited removal (y eliminaba el derecho a una audiencia en los tribunales) para las personas que no puedan demostrar dos años de presencia continuada. (The Washington Post, 2025).

13. Nota del editor Al cabo de un año de la segunda Administración Trump, se han deportado 230 000 personas detenidas en el territorio, además de 270 000 en la frontera que, junto con 40 000 personas que se han «autodeportado» en un nuevo programa, eleva la cifra a 540 000. Esta es menor que las cifras de los dos últimos años de la Administración de Biden (590 000 en 2023 y 650 000 en 2024). (The New York Times, 2026)

14. Nota del editor Minerales que provienen de la extracción ilegal en zonas políticamente inestables obtenidos a través del trabajo forzado. (European Commission, s.f.).

15. Nota del editor En enero de 2026 la Oficina del Departamento de Justicia en Washington D.C., bajo el mando de Jeanine Pirro, abrió una investigación criminal en contra de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, por la costosa renovación de la

sede del Banco Central. La acción judicial fue entendida como un castigo por parte de Trump, que ha exigido múltiples veces que Powell baje las tasas de interés, hecho que compromete la independencia del banco. (The New York Times, 2026).

16. Nota del editor El 3 de enero de 2026 Estados Unidos realizó una corta y fulminante operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —acusado y buscado por la justicia americana— tras meses de un enorme despliegue de sus Fuerzas Armadas y de operaciones militares de escala reducida (y dudosa legalidad) en el Caribe. Trump luego declaró que «administraría» el país por un futuro indeterminado. (CNN, 2026).

17. Nota del editor Empleados de una agencia independiente de la rama ejecutiva asignados temporalmente a una misión en otra agencia estadounidense o en una organización internacional sin perder su original puesto de trabajo. (USLegal, s.f.).

18. Nota del editor Trump se ha expresado con vehemencia sobre su deseo de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca —un estado cofundador de la OTAN—. Incluso ha amenazado hacerlo militarmente, poniendo en entredicho el futuro de la organización. (The New York Times, 2026).

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN I

Los medios y los fines

SECCIÓN II

Capítulo 1. Género, familia y derechos

Capítulo 2. Inmigración y seguridad fronteriza

Capítulo 3. Economía y comercio

Capítulo 4. Medioambiente y energía

Capítulo 5. Política exterior y defensa

Nota sobre las fuentes

Fuentes de las notas a pie de página

Agradecimientos